

PONENCIAS

Jornadas
Repensar la crisis desde Andalucía

Juan Torres López
Enrique Gil Calvo
Luis Enrique Alonso Benito
Andrés Ortega Klein
Joaquín Abellán García

PN05/12



El Centro de Estudios Andaluces es una entidad de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, adscrita a la Consejería de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía.

El objetivo esencial de esta institución es fomentar cuantitativa y cualitativamente una línea de estudios e investigaciones científicas que contribuyan a un más preciso y detallado conocimiento de Andalucía, y difundir sus resultados a través de varias líneas estratégicas.

El Centro de Estudios Andaluces desea generar un marco estable de relaciones con la comunidad científica e intelectual y con movimientos culturales en Andalucía desde el que crear verdaderos canales de comunicación para dar cobertura a las inquietudes intelectuales y culturales.

Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reproducida, grabada o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprografito, magnética o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces.

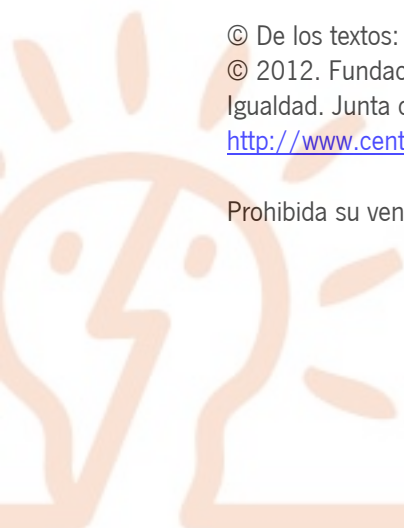
Las opiniones publicadas por los autores en esta colección son de su exclusiva responsabilidad

© De los textos: sus autores.

© 2012. Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la Presidencia e Igualdad. Junta de Andalucía

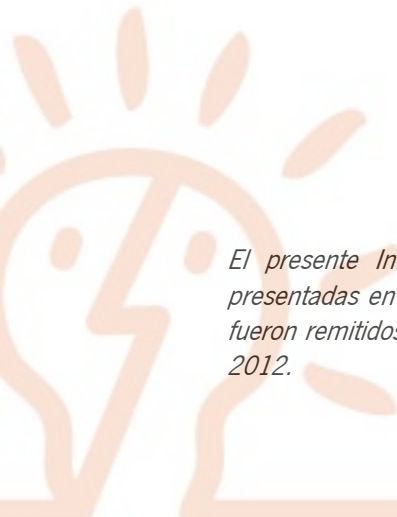
<http://www.centrodeestudiosandaluces.es>

Prohibida su venta.



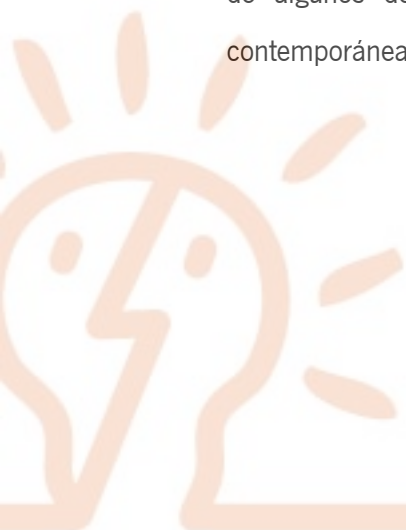
ÍNDICE

| | |
|----|--|
| 4 | Causas estructurales y respuestas alternativas a la crisis <i>Juan Torres López. Universidad de Sevilla</i> |
| 14 | La política de la intimidación punitiva <i>Enrique Gil Calvo. Universidad Complutense de Madrid</i> |
| 23 | La crisis de la norma social del empleo: Entre la estabilidad imaginada y la nueva pobreza <i>Luis Enrique Alonso Benito. Universidad Autónoma de Madrid</i> |
| 44 | España: un caso de fallo de país <i>Andrés Ortega Klein. Periódico 'El País'</i> |
| 55 | ¿Se puede reinventar la política? <i>Joaquín Abellán García. Universidad Complutense de Madrid</i> |



El presente Informe de Factoría PN05/12, no contempla la totalidad de ponencias que fueron presentadas en las jornadas "Repensar la Crisis desde Andalucía". Se recogen sólo aquellos textos que fueron remitidos por los/as autores/as a la Fundación Centro de Estudios Andaluces, a fecha diciembre 2012.

El pasado 18 de Octubre se celebraron, bajo el auspicio de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, unas jornadas sobre las causas y consecuencias de la Crisis Económica que desde finales de la década pasada nos viene afectando, y cuya intensidad -global- está poniendo en entredicho no solo los modelos macroeconómicos tradicionales sino también las bases idiosincrásicas y políticas de la sociedad europea. En este contexto desde la Fundación diseñamos las jornadas “Repensar la crisis desde Andalucía” como punto de encuentro para la reflexión de científicos sociales de disciplinas diversas. En concreto desde el ámbito de la Economía tomaron la palabra Emilio Ontiveros, cuya amplia experiencia al frente de Analistas Financieros Internacionales quedó patente por la robustez de los argumentos esgrimidos para explicar que nos enfrentamos a una crisis crediticia que requiere una profunda reestructuración del sistema bancario, cuestión en la que enfatizó el segundo ponente - Juan Torres-, quien como catedrático de Economía Aplicada subrayó la necesidad imperiosa de lucha contra la creciente desigualdad socioeconómica que estamos padeciendo y que, en palabras del tercer ponente - el periodista Joaquín Estefanía- pueden ser la base de una fractura social y política. Desde el ámbito de la Sociología intervinieron Enrique Gil Calvo, quien trató sobre la legitimación político-moral de las políticas de ajuste presupuestario, y Luis Enrique Alonso, que trató de las consecuencias de la desregulación laboral sobre las condiciones de trabajo y sobre el propio concepto de ciudadanía. Finalmente, desde el ámbito de la Política, Andrés Ortega Klein, ensayista, columnista y editorialista de *El País*, nos explicó la crisis desde una óptica doble: por un lado, la de las causas, y, por otro, la del diagnóstico y la prospectiva para superar lo que denomina *fallo de país*. Asimismo, Joaquín Abellán, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense, en su intervención nos señaló los dilemas de la política en las sociedades capitalista avanzadas y algunas propuestas de reinención de la política con la ayuda de algunos de los autores e ideas más innovadoras y sugerentes de la teoría política contemporánea.



Causas estructurales y respuestas alternativas a la crisis

Juan Torres López

Universidad de Sevilla
Catedrático de Economía Aplicada



Para poder dar respuestas eficaces a las crisis entiendo que es fundamental partir de un diagnóstico lo más acertado posible de sus causas, no solo de las más inmediatas sino de las estructurales, es decir, de las que tienen relación con los procesos socioeconómicos más profundos, con las variables enraizadas en lo más hondo de las relaciones económicas y que, precisamente por eso, suelen quedar más ocultas al análisis que se necesita para poner en marcha las soluciones políticas.

En mi opinión, y como he tratado de demostrar en otros trabajos¹, lo que viene siendo habitual en el tipo de análisis dominante sobre la crisis es que se pase por alto una serie de circunstancias que a mi juicio son precisamente las determinantes de lo que ha ocurrido y, por tanto, fundamentales para poder acertar con el tratamiento que realmente permita superar sus efectos más negativos para la inmensa mayoría de la población.

Por ello, me gustaría dedicar mi intervención a señalar diez aspectos que me parecen esenciales en relación con los problemas que viene sufriendo la economía española en el contexto de la crisis internacional en el que nos desenvolvemos.

1. La actual crisis no es *la* crisis, como generalmente nos referimos a la crisis. En realidad es una crisis más, de otras muchas, y eso me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta.

El hecho de que desde los años setenta hasta aquí haya habido alrededor de 130 crisis, perturbaciones graves o situaciones de stress financiero refleja que esta es la que estamos forma parte de una etapa en la que la inestabilidad financiera es casi un estado habitual. Algo particularmente relevante si se compara con lo sucedido en los treinta años anteriores en los que prácticamente no hubo crisis financieras de ningún tipo.

El hecho de que fases temporales tan extensas tengan propiedades y manifestaciones financieras tan diferentes obliga a considerar las circunstancias en que cada una de ellas se desarrolló porque éstas no pueden ser ajenas al hecho de que o no se produzcan crisis financieras o que se multipliquen como auténticas pandemias.

Como acaba de poner de relieve Alan M. Taylor en un trabajo reciente², las diferencias entre el periodo comprendido entre 1945 y mediados de los años setenta y entre éstos años y la actualidad son muy significativas y si las ponemos de relieve podremos deducir, por tanto, cuáles son las circunstancias que están asociadas a la multiplicación de las crisis financieras o incluso a su propia existencia.

En el primer periodo hubo una gran disciplina del sector bancario, control de los movimientos de capital, estricta regulación doméstica, bajo crecimiento del crédito, muy poca innovación financiera y, asociado a todo ello, mayor ahorro, alta inversión y tasas de crecimiento de la actividad económica más elevadas. Justo lo contrario de lo que ha ocurrido desde los años

¹ Juan Torres López y Lina Gálvez Muñoz, *Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera*, Icaria, Barcelona 2010; Juan Torres López. *La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se ha caído todo y no se ha hundido nada?* Sequitur, Madrid 2011.

² Alan M. Taylor, *The great leveragin*. NBER Working Paper 18290, 2012, en <http://www.nber.org/papers/w18290>.

setenta a la actualidad, cuando se ha relajado la disciplina en grado extremo, cuando hay plena libertad de movimientos de capital, una innovación financiera constante orientada a la especulación y, como consecuencia de ello, una derivación permanente del ahorro hacia la esfera de las finanzas puramente especulativas que desfavorecen el crecimiento de la actividad productiva.

Por tanto, sabemos que esta crisis no es una excepción ni un hecho aislado sino una manifestación más de los males que produce un determinado régimen financiero bajo la desregulación y liberalización. Y, en consecuencia, sabemos, pues, que es esto mismo lo que se debería evitar si queremos que las crisis dejen de producirse.

2. Si bien esta crisis es un episodio más de la pandemia que sufrimos desde los años setenta, sí es cierto, sin embargo, que es especialmente destacable y singular por su magnitud y extensión, rasgos que no creo que sea necesario documentar ahora pues son bien sabidos los efectos tan dramáticos que ha tenido sobre el conjunto de la economía mundial.

En realidad, esta mayor dimensión es la consecuencia de que se exacerban día a día dos grandes circunstancias que están en la base de la crisis y a las que a menudo no se concede el lugar principal que tienen. La primera es el extraordinario incremento de la desigualdad que, desde cualquier punto de vista que se considere, alcanza hoy día los niveles más altos desde la Gran Depresión³. La segunda es el desorbitado aumento de la deuda asociada a la expansión de la actividad especulativa y a la innovación financiera constantemente alimentada por la banca⁴.

La desigualdad es el motor que alimenta y da fuerza a los flujos de capital especulativo que desestabilizan constantemente los mercados y que, al mismo tiempo, debilitan la actividad productiva. Por eso, como ha señalado, es la variable clave sobre la que habría que actuar para poder cambiar de rumbo a la economía internacional y, más concretamente, para poder erradicar la dinámica de crisis recurrentes en la que se inserta la que estamos viviendo.

Por su lado, el incremento de la deuda se ha convertido ya en una bomba de relojería que no solo ha dado a esta crisis la dimensión tan extraordinaria que ha alcanzado, sino que amenaza con detonar en otros ámbitos (deuda soberana, crisis alimentaria, quiebras bancarias de momento disimuladas con artimañas contables, creación constante de burbujas...) produciendo nuevos episodios de crisis.

Y en este sentido no se puede olvidar que el origen de este incremento constante de la deuda no es otro que el privilegio de creación de dinero que tiene la banca privada gracias al sistema de reservas fraccionarias, de modo que sin limitar o ponerle fin será inevitable que sigamos sufriendo nuevos episodios de crisis, o que la salida de la actual sea prácticamente imposible si entendemos por salir de ella el alejar con seguridad un nuevo ramalazo de perturbaciones financieras.

3. Como ya he anticipado, las circunstancias que actuaron como detonador directo de la actual crisis (la difusión de hipotecas *sub prime* y la posterior quiebra del sistema bancario que

³ Un análisis reciente sobre sus consecuencias de todo tipo Joseph Stiglitz, *El precio de la desigualdad*. Taurus, Madrid 2012.

⁴ Vid Vicenç Navarro y Juan Torres López, *Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero*. Espasa, Madrid 2012.

suscribió y difundió sus derivados) es el resultado de la desregulación, de la falta de disciplina y de vigilancia por parte de los supervisores, de la complicidad de ciertos poderes públicos con los intereses de la banca privada internacional, o del fundamentalismo con que se ha gestionado la política financiera⁵. Por tanto, resultará también imposible salir de la crisis y evitar otras próximas, sucesivas e incluso lógicamente de mayor envergadura, si no se establece un nuevo tipo de regulación financiera, mucho más severa, disciplinada, represiva y autónoma respecto a los intereses privados, tanto de los bancos, grandes fondos de inversión y empresas multinacionales como de las agencias de calificación y, en general, de los grandes polos de poder económico que en los últimos treinta y cinco años se han erigido en las referencias que establecen lo que se puede hacer o no en los mercados financieros.

La falta de pasos decisivos en este campo, dadas las servidumbres indisimuladas de los gobiernos respecto a los grandes poderes financieros, impiden que se recobre el sistema financiero mundial, de modo que existiendo una abundancia impresionante de capital financiero no hay financiación, sin embargo, para las empresas y la actividad productiva, porque los recursos se derivan constantemente hacia la especulación, lo que materialmente impide la recuperación y la salida de la crisis.

Las reformas financieras que se han propuesto han sido tímidas y apenas si se han llevado a la práctica porque se han dilatado tanto los plazos y las exigencias que, en la práctica, no han tenido efecto alguno de cara a resolver los problemas de financiación que aún siguen padeciendo las economías.

4. Las políticas que los gobiernos han tomado frente a la crisis han sido insuficientes, inicialmente, y en algún caso, como especialmente en Europa, totalmente contrarias a lo que puede permitir que se recupere el ingreso, la actividad y el empleo.

La política de salvar a la banca considerando que los bancos afectados eran demasiado grandes para caer ha provocado un gasto ingente de recursos, una mayor concentración financiera y a la postre, como acabo de señalar, que ni siquiera se haya resuelto el problema bancario que dio lugar a la crisis. En su lugar, la inmensa mayoría de los bancos siguen siendo bancos verdaderamente *zombies*, cuya verdadera situación solo se disimula gracias a estratagemas y mentiras contables consentidas por los gobiernos en beneficio en su único beneficio.

Los primeros planes de estímulo permitieron evitar una verdadera debacle pero finalizaron antes de tiempo, consumieron menos recursos de los necesarios y los aplicaron a actividades que simplemente lograron mantener cierto nivel de empleo pero sin ser capaces de modificar la lógica o el modelo productivo, de combatir la desigualdad o de proporcionar las bases para un nuevo uso más equilibrado y sostenible de los recursos.

Para colmo, el contumaz fundamentalismo con que se están aplicando en Europa las llamadas políticas de austeridad (realmente, solo encaminadas a que Alemania pueda asegurar la mayor cantidad posible de retornos en la deuda que los bancos de la periferia tienen con los suyos) está provocando una nueva recesión en el seno de la Unión Monetaria, algo inevitable cuando a todos los países de la eurozona se les impone una estrategia deflacionista que mengua los

⁵ Vid. Joseph E. Stiglitz, *Caída libre: El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial*, Taurus, Madrid, 2010

ingresos de todos ellos y, por tanto, su capacidad de contribuir al sostenimiento cooperativo de los demás mercados, que es la base que puede hacer exitosa una zona monetaria auténtica.

Sin un cambio radical de orientación, sin poner en marcha un auténtico plan de estímulo de las economías, basado no solo en la acumulación de mayor cantidad de recursos sino en el cambio del modelo productivo imperante en la UE y en el seno de sus naciones integrantes, será igualmente imposible modificar la tónica nuevamente recesiva en la que nos encontramos y encaminarnos a una salida efectiva de la crisis.

5. A los problemas de caída de la actividad y desempleo que produjeron en casi todo el mundo la falta de financiación a empresas y consumidores y la caída subsiguiente de la demanda, se siguió en la mayoría de los países otro igualmente grave provocado por el incremento vertiginoso de la deuda soberana de los estados, como consecuencia, al mismo tiempo, de la caída de los ingresos públicos y del aumento del gasto público.

Pero hay que tener en cuenta que los problemas de prima de riesgo que algunos países, como España, están sufriendo no tienen que ver tanto con la magnitud de la deuda (la de España sería aún llevadera incluso con el volumen que tiene en estos momentos) sino con la presión especulativa que hizo subir artificialmente los intereses con los que se ha financiado.

Y, sobre todo, hay que considerar otras dos circunstancias que igualmente se están soslayando a la hora de hacer frente a este problema de deuda.

La primera, que el problema principal no radica en la deuda pública sino en la privada, que es la que realmente resulta impagable, no ya en las condiciones de falta de actividad e ingresos actuales sino en las que previsiblemente se darán en el futuro.

Lo que en realidad se está produciendo es una reconversión de la deuda privada en otra pública, para que sea el conjunto de la población la que se haga cargo de la que han generado, principalmente y en beneficio propio, las grandes empresas financieras. En 2008, cuando comenzaba la crisis, la deuda pública representaba un 19,1% del total (pública y privada) de la española, la de las familias un 20,6%, la de las Pymes un 3% y la de las grandes empresas un 57% (de ellas, el 95% correspondía a las de más de 250 trabajadores). Y eso teniendo en cuenta que el 64,7% de la deuda de las familias correspondía al 10% más rico de todas ellas.

Lo que se trata de hacer cuando los propios mercados han puesto en jaque al Estado español haciendo que artificialmente suba la prima de riesgo es justificar un *rescate* de la economía española en su conjunto para rescatar en realidad a los bancos que son deudores de las entidades europeas, principalmente alemanas y francesas, convirtiendo así en pública su deuda privada.

La segunda circunstancia a tener en cuenta tiene que ver con el origen de la deuda total española y cuya cuantía es hoy día tan preocupante (aunque preocupante, como he señalado, más por la presión de los tipos de interés que por su volumen total, todavía relativamente manejable y, desde luego, asumible al empezar la crisis, cuando era el segundo menor de la Unión Europea).

Habitualmente se señala que su origen está en supuestos excesos en sector público, en grandes gastos sociales y en un Estado de Bienestar que se considera desmesurado, de donde se deduce que para combatirla es preciso recortar gastos en educación, sanidad, pensiones, dependencia, administración pública, etc.⁶

Sin embargo, así se falsea la realidad porque no se tiene en cuenta que el verdadero origen de la deuda pública española es otro: el hecho de que España (como los demás países europeos de la zona euro) no haya podido disponer de un banco central que financiara los gastos públicos sin interés o a un interés super reducido y, en lugar de ello, haya tenido que hacerlo mediante financiación bancaria privada a los intereses de mercado.

Una simulación elemental permite comprobar que si España hubiera dispuesto de una financiación al 1% procedente de un banco central desde 1989, la deuda acumulada por los sucesivos saldos primarios acumulados desde esa fecha hasta la actualidad representaría un 14% del PIB, y no estaríamos, por tanto prácticamente en el 90%, como en la actualidad⁷.

El grueso de la deuda, por tanto, es el resultado de una decisión asumida en Europa claramente en contra de los intereses de los pueblos, de cuyas consecuencias nunca se le ha hablado y que, por tanto, puede decirse que ha sido impuesta claramente contra su voluntad, es decir, que es una deuda odiosa o ilegítima.

Desde el año 2000, España ha pagado unos 227.000 millones en concepto de intereses y eso es lo que ha ido acumulando una deuda cada vez mayor, porque de haber sido financiada como deben ser financiados los gastos de los estados no habría alcanzado nunca el volumen de ahora. Téngase en cuenta que solo en 2008, 2009 y 2010 España ha tenido que pagar 120.842 millones de euros para hacer frente a la deuda en estas condiciones que le imponen los mercados⁸.

Por tanto, hay que concluir que España tiene derecho a revisar la naturaleza de su deuda, a repudiar la ilegítima u odiosa, y que debe plantearse las consecuencias tan negativas que ha tenido y que va a tener mantenerse en una zona monetaria mal diseñada, o mejor dicho, diseñada para favorecer el negocio de la banca privada a costa de crear innecesariamente un problema ingente de deuda soberana en algunos de sus estados miembros.

6. Como es bien sabido, España tiene una situación económica y financiera más difícil que otras economías de su entorno. Esto es el resultado del problema de deuda al que acabo de hacer referencia (más concretamente a la gran presión especulativa de los mercados) pero, sobre todo, a otras circunstancias que es preciso tener en cuenta para poder actuar sobre ellas, al contrario de lo que viene ocurriendo cuando se soslayan.

⁶ Hemos demostrado la falsedad de estas argumentaciones en Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón, *Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España*. Sequitur, Madrid 2011. Versión libre en pdf en <http://www.sequitur.es/hay-alternativa/>

⁷ Eduardo Garzón Espinosa. *Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública*. En <http://eduardogarzon.net/?p=328>.

⁸ Agustín Turiel. *Informe sobre la legitimidad de la deuda pública de la Administración Central del Estado de España*. En <https://www.box.com/s/a5d5f0f2d1d4c7a90793>

En primer lugar, que la gran influencia de la banca y los grandes grupos de poder económico ha favorecido en los últimos decenios un tipo de especialización muy negativa de nuestra economía, basada en el desarrollo de un modelo productivo ineficiente, insostenible, depredador, desigualitario, desvertebrado y muy dependiente⁹.

En segundo lugar, el entorno de la eurozona que, como ya he señalado, fue diseñado de modo muy imperfecto, sin disponer de los instrumentos que son imprescindibles para que una unión monetaria no cree más problemas de los que viene a resolver y que, así, perjudica mucho a los espacios periféricos o más dependientes, como el de España.

Por último, el gran poder del que disponen en nuestro país la banca y los grandes grupos oligárquicos, proveniente de los extraordinarios privilegios que adquirieron en la dictadura fascista y la mayoría de los cuales no solo no han desaparecido sino que incluso se han agrandado, y, por otro lado, de la gran desigualdad que hay en nuestra sociedad no solo en términos de ingresos sino a la hora de tomar decisiones políticas. Eso es lo que ha permitido que se haya desarrollado una burbuja inmobiliaria tan peligrosa sin control ni vigilancia (obviando las demandas que hacían técnicos, funcionarios cualificados o cientos de especialistas o personalidades independientes, como las que hicieron en varias ocasiones los inspectores del Banco de España cuando denunciaban la actitud "pasiva" de los órganos de dirección del Banco de España con su gobernador al frente¹⁰).

7. Todas estas circunstancias son las que han provocado la particular gravedad de la crisis española que (con independencia de otras de carácter más estructural) tiene tres manifestaciones inmediatas y principales y que son las que con carácter de urgencia habría que resolver y no se están resolviendo: la gran destrucción de empleo, al haberse venido casi completamente abajo el sector de la construcción y la disminución subsiguiente de la demanda interna, la presión de los mercados sobre la financiación de la deuda pública, y la crisis bancaria que impide financiar adecuadamente a las empresas y consumidores.

Lamentablemente, las medidas que se han venido adoptando siguiendo las preferencias de los grandes grupos oligárquicos y las imposiciones de la Unión Europea no solo no los resuelven sino que los han venido agravando.

Las políticas de austeridad hunden aún más la demanda interna, la inactividad del Banco Central Europeo, dedicado a proporcionar dinero fácil a la banca privada para que ésta haga negocio financiando a interés más elevado a los gobiernos, fomentan y no evitan la actividad de los especuladores contra España (como contra Grecia, Irlanda, Italia o Portugal), y las sucesivas reformas financieras, en lugar de dirigirse a garantizar de verdad la existencia de un auténtico sector financiero que proporcione recursos a la economía, se han limitado a reforzar el poder de las grandes entidades y a ponerles en bandeja el mercado (sobre todo el que venían teniendo las

⁹ Vid. Albert Recio, *Capitalismo Español: La inevitable crisis de un modelo insostenible*. Revista de Economía crítica, nº 9, 2010; Emmanuel Rodríguez López e Isidro López Hernández. *Del auge al colapso. El modelo financiero-inmobiliario de la economía española (1995-2010)*. Revista de Economía crítica, nº 12, 2011; Albert Puig Gómez, *El modelo productivo español en el período expansivo de 1997-2007: insostenibilidad y ausencia de políticas de cambio*. Revista de Economía crítica, nº 12, 2011.

¹⁰ Juan Torres López. *Las responsabilidades del Banco de España*. En <http://www.attacmadrid.org/?p=4148>.

cajas de ahorros) para que así puedan salir de la insolvencia generalizada en la que prácticamente todas ellas se encuentran de facto.

En lugar de afrontar los problemas que realmente agudizan la crisis en nuestro país para salir definitivamente de ella, se ha aprovechado la situación de debilidad para poner en marcha reformas y recortes cuyo único fin es el de facilitar la entrada de negocios privados en los servicios públicos, para mejorar aún más la capacidad negociadora de las grandes empresas y para ahorrarles impuestos a los niveles más elevados de renta¹¹.

8. Cuando se plantea la necesidad de hacer frente a todos estos problemas que afectan a la economía española, además de afirmar que "no hay alternativas" (un juicio que en realidad no es argumento y que hemos tratado de desmontar en el libro anteriormente citado *Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España*, se suele argumentar que España no tiene capacidad de maniobra alguna en el seno de la unión monetaria.

Es cierto que nuestra pertenencia a la eurozona la limita en grado sumo en cuanto a instrumentos que serían esenciales para hacer frente a una crisis como esta, sobre todo, en política monetaria y de cambio que posibilitase la devaluación, y que impone severas restricciones en otras políticas como la presupuestaria. Eso es así, y de ahí, como he señalado, que debiera ser obligado poner sobre la mesa las ventajas e inconvenientes reales que tiene para España pertenecer a una unión monetaria diseñada mal y, digámoslo así, en su contra, en beneficio exclusivo de los grandes grupos financieros y empresariales y particularmente de los de Alemania. Pero dicho eso, no es del todo cierto que España carezca por completo de autonomía y que nuestro gobierno no pueda hacer nada que no sea lo dictado por Bruselas, como suele decirse. Por el contrario, ha dispuesto y dispone de más capacidad de maniobra de la que ha utilizado y esa es la causa de una parte importante de los males y sufrimientos que estamos padeciendo.

La pertenencia a la unión monetaria no obliga a financiar a la Iglesia Católica, por poner un ejemplo, con más recursos de los que paralelamente se recortan en servicios sociales, o a eliminar impuestos como el de sucesiones o patrimonio, que, incluso en su moderada conformación anterior, permitirían ingresar cantidades que hubieran podido evitar gran parte de esos recortes. Como tampoco ha obligado a realizar las contrarreformas fiscales de años atrás que han mermado ingresos públicos y fomentado la evasión, o a ser tan contemplativos con la economía sumergida.

Incluso en el marco de la unión monetaria se podrían tomar medidas, como las fiscales que proponen los técnicos del Ministerio de Hacienda, que permitieran multiplicar los ingresos del Estado; o las que se vienen haciendo, por poner un ejemplo, para liberar demanda efectiva mediante la rebaja en la deuda tributaria, para crear nuevos tipos de contratos de trabajo que permitieran anticipar la creación de empleo a las empresas; o la nacionalización de bancos en condiciones menos onerosas y mucho más efectivas para relanzar la economía que las medidas que se han tomado.

¹¹ Sobre estas medidas en la etapa de gobierno del Partido Popular, vid. Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón. *Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP*. Deusto, Madrid 2012.

9. Por todo ello, es muy importante desechar la idea tan intensamente asumida por una gran parte de la población (en gran parte porque se insiste mucho en difundirla desde los medios de comunicación ligados a los grandes intereses financieros y empresariales, es decir, desde prácticamente todos los privados), que tiende a hacer creer que la crisis es una especie de fatalidad, una circunstancia inapelable frente a la que apenas si se puede hacer nada que no sea lo que desde fuera se nos dice que hay que hacer. Como tampoco se puede admitir la idea que alternativamente se difunde a veces desde otros puntos de vista, según la cual todo es el resultado de un poder omnímodo de los mercados, de una dictadura financiera frente a la que no se puede hacer nada si no es provocando una especie de cambio universal que modifique todas y cada una de las condiciones de nuestra existencia.

Ninguna de esas dos versiones soporta una contrastación rigurosa con la realidad. Lo que nos ha sucedido no es el fruto de un imponderable, de una catástrofe inevitable, sino de que los gobiernos han dejado de hacer, que ellos mismos han establecido las condiciones que han permitido que se produzcan los hechos que han dado lugar a la crisis. Los gobiernos tienen en sus manos las medidas que pueden permitir que los asuntos económicos se desenvuelvan de otro modo y, particularmente, que pueden hacer que ni siquiera se tengan por qué dar las crisis financieras recurrentes que están destrozando a la economía mundial en los últimos años.

10. Teniendo en cuenta factores como los que he tratado de analizar en esta intervención creo se puede tener enfrente una dimensión diferente de la crisis con la que resulta más fácil pensar en alternativas y ponerlas en marcha.

No todos los países tienen los mismos problemas, ni han padecido los mismos males, de modo que sería cuestión de seguir su camino y no, como está sucediendo, el que nos lleva en dirección contraria. Y la naciones que han llegado más lejos en progreso y en estabilidad social, incluso las que son más competitivas, si es que se quiere recurrir a este criterio convencional, muestran caminos por donde se supone que deberían transitar las que tratan de emularlos, luego lo que debería ser objeto de reflexión es que se nos impongan otros bien diferentes. Y, como he dicho, si hemos vivido largas épocas sin crisis financieras, lo significativo es el empeño en huir de las condiciones políticas y regulatorias que se daban entonces, para insistir, por el contrario, en las que sabemos que están asociadas a la perturbación financiera constante y a la crisis.

Las propuestas de políticas y medidas alternativas son muy abundantes, e incluso algunas de ellas han pasado ya la simple formulación teórica para aplicarse en otros países con éxito. Por ello me parece que resulta obligado concluir que si economías como la española se debaten en una situación tan frágil, incapaces de salir de la crisis y de resolver los problemas de la deuda, del empleo o de la generación de ingresos que otras economías han resuelto, incluso en el mismo marco deteriorado del capitalismo especulativo de esta etapa neoliberal en la que estamos, lo que ocurre no es que no existan alternativas sino que se carece de la decisión, de la voluntad y del poder político suficientes como para ponerlas en marcha.

No debe olvidarse una cuestión elemental que se quiere ocultar: los problemas económicos no tienen soluciones técnicas, sino políticas. Y siendo así, sabiéndolo, quizá quede más claro que el deterioro de la situación económica de España, o de Europa en general, no es el resultado de que no existan soluciones alternativas sino de que se ha debilitado tanto la democracia que es imposible que se impongan las que desea la mayoría de la población y que, en su lugar, se

apliquen las políticas que solo benefician a una parte muy minoritaria, cuyo bienestar y riqueza es ajeno a la estabilidad económica y a la buena marcha general de los asuntos económicos.



La política de la intimidación punitiva

Enrique Gil Calvo

Universidad Complutense de Madrid
Catedrático de Sociología



Las políticas de lucha contra la crisis del euro aplicadas hasta hoy en la UE se han fundado exclusivamente en el ajuste fiscal y la austeridad presupuestaria, obteniendo como único resultado la perpetuación agravada de la recesión económica sin que se vislumbren esperanzas de una próxima recuperación. Pese a lo cual, tanto los gobiernos estatales como las autoridades europeas continúan manteniendo a ultranza la necesidad de proseguir con la aplicación de una austeridad draconiana, que está imponiendo un inmerecido sacrificio a todas las poblaciones europeas. Y especialmente a las del sur de Europa como ocurre con la propia Andalucía, donde se acumulan los peores índices de depresión social y económica: desempleo, caída de rentas, exclusión social, empobrecimiento generalizado, etc. En tales condiciones, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo la política de austeridad, con continuas rebajas de sueldos y derechos sociales cuyos únicos efectos son la generalización de un estéril castigo indiscriminado?

1. Obediencia debida

Puesto que semejante estrategia no parece tener ninguna eficacia económica sino más bien al contrario, dados sus evidentes efectos contraproducentes en tanto que procíclicos (es decir, reforzadores del actual ciclo recesivo), cabe deducir de todo ello que su único sentido es primordialmente político. Contra toda lógica económica, los gobiernos europeos, y entre ellos el nuestro, se están empeñando en mantener la forzada imposición de una política restrictiva que supone un inmerecido castigo para las poblaciones afectadas, en términos de brutal caída de la renta disponible.

Una política restrictiva que, en contra del mito popular, no viene impuesta por los mercados financieros. Antes al contrario, tanto éstos como las propias agencias internacionales defensoras de la ortodoxia, tipo FMI, vienen solicitando desde hace algún tiempo que se rectifique la actual política de austeridad unilateral para complementarla y reequilibrarla con otras políticas de estímulo favorecedor del crecimiento, como único modo de salir del actual círculo vicioso por el que la recesión realimenta la deuda y viceversa. Pero no sucede así. Por el contrario, con estólida tozudez, nuestros gobiernos siguen empeñados en sacrificar a las poblaciones europeas precipitándolas por el abismo de la depresión y el empobrecimiento.

¿Qué puede explicar una política gubernamental tan dogmática como ineficaz y contraproducente? El consabido electoralismo de los partidos en el poder no parece explicación suficiente, pues lejos de hacerles ganar elecciones, esta suicida política de austeridad les está barriendo del gobierno país tras país por efecto dominó con una sola excepción: la de aquellos países como Alemania, pero también Holanda o Finlandia (los tres que mantienen la triple A como calificación de su deuda soberana por las agencias de *rating*), que salen beneficiados en sus relaciones de intercambio con los demás.

De donde se deduce una posible explicación de tipo geopolítico, basada en la división bipolar del espacio europeo entre un norte acreedor y un sur deudor¹: los conocidos PIGS o GIPSIs. Según esto, los gobiernos del sur sólo aplicarían la injusta y errada política de austeridad obligados por los gobiernos del norte. Son los temidos MoU (*memorandum of understanding*):

¹ Véase mi artículo "Madrid, Berlino i el fantasma del genius loci" de próxima publicación en *Limes*, revista italiana de geopolítica (www.limesonline.com).

las duras medidas de ajuste y recorte que se exigen como requisito condicional para poder recibir los salvadores paquetes de rescate financiero otorgados por el Eurogrupo.

Pero si esto es así, nos situamos en la misma lógica de la *obediencia debida* que utilizaron los golpistas latinoamericanos para justificar sus criminales violaciones de los derechos humanos: los *milicos* sólo habrían torturado y asesinado porque así se lo ordenaban sus superiores. Es la misma justificación que utilizan los gobiernos europeos del sur: si castigan y sacrifican a sus poblaciones, violando (o al menos recortando) todos y cada uno de sus derechos sociales, es por obediencia debida a sus superiores, los gobiernos del norte que se lo imponen como precio a pagar por sus rescates salvadores.

De modo que seguimos bajo el mismo régimen punitivo del castigo indiscriminado a las poblaciones sacrificadas, ya sea un castigo directo impuesto por sus propios gobiernos o un castigo indirecto impuesto por los gobiernos que ejercen el poder *de facto* en las instituciones europeas. Ahora bien, si aceptamos esta explicación geopolítica, basada en la asimetría bipolar norte-sur, seguimos sin embargo huérfanos de razones que nos expliquen la utilidad del sacrificio de las poblaciones meridionales.

¿Por qué imponen los gobiernos del norte la orden de castigar a las poblaciones del sur? Evidentemente, no es por razones económicas, puesto que la política de la austeridad punitiva está arruinando al conjunto de la Unión Europea, no sólo al sur deudor sino también al norte acreedor. *Ergo* ha de ser por razones políticas. Pero ¿cuáles serían estas? ¿El egoísmo nacionalista que induciría a los poderosos gobiernos del norte a preservar a sus propias poblaciones, descargando todo el coste de la crisis sobre las inermes espaldas de las empobrecidas poblaciones del sur? En tal caso deberíamos concluir que la razón última de la política punitiva también es electoral en última instancia.

Ahora bien, el electoralismo es un arma de doble filo que aporta evidencias contradictorias entre sí. Es verdad que los primeros ministros de Grecia, Portugal y España perdieron el poder tras aplicar la política de austeridad que sus electores interpretaron como un castigo inmerecido e injusto. También Nicolas Sarkozy cayó porque apostó por la austeridad frente a un François Hollande que lo hizo por la reactivación. Y en Alemania, las expectativas electorales del partido liberal, que apoya el rigor exigido por el Bundesbank, se han hundido.

Pero en cambio la canciller Angela Merkel mantiene intacta su popularidad, aunque no esté nada claro que pueda revalidar su actual coalición con los liberales. Entre tanto, en el polo opuesto del sur mediterráneo, el tecnócrata italiano Mario Monti ha logrado un aplauso casi unánime con sus políticas de austeridad, mientras la opinión pública le anima para que se presente a las elecciones. De modo que las razones electoralistas parecen contradecirse, dado que la política de austeridad que castiga a las poblaciones tanto puede hundir gobiernos como ensalzarlos y reforzarlos en el poder.

2. La política del castigo

Y para entender estas contradicciones cabe plantear a título de hipótesis otra explicación adicional. Lo que la opinión pública demanda para sentirse segura y protegida frente a la incertidumbre creada por la crisis son gobiernos fuertes, revestidos de plena autoridad: como el de Merkel en Alemania o el de Monti en Italia. Gobiernos tecnocráticos o autoritarios que no dudan en imponer políticas de austeridad inmisericorde aunque ello implique sacrificar a las poblacio-

nes. Y en el caso español, el que Mariano Rajoy puntúe a la baja parece deberse no tanto, o no sólo, a sus recortes disfrazados de reformas sino al modo timorato, vergonzante y eufemístico con que los propone.

Creo que aquí, en esta apuesta por la firmeza y la autoridad, se halla la clave de la dogmática elección de la austeridad inflexible como política unilateral de lucha contra la crisis. Si se decide aplicar una política de ajuste y castigo indiscriminado es porque funciona. No en términos económicos, evidentemente (pues lejos de funcionar se ha revelado enormemente perjudicial), sino en clave política, terreno donde parece ser eficaz para recuperar la autoridad gubernamental.

¿Quiere esto decir que las poblaciones europeas se han vuelto masoquistas, pues parecen preferir que las castiguen con penalidades y sacrificios? No, en absoluto. Pero lo que sucede es que tras un lustro de crisis se ha creado un clima de creciente miedo, inseguridad e incertidumbre. Y en tal caldo de cultivo, las poblaciones se hacen cada vez más conservadoras, tendiendo a preferir los gobiernos fuertes a los gobiernos débiles. De ahí que para revestirse con una imagen de autoridad y fortaleza, los gobiernos opten por adoptar políticas de austeridad a ultranza, evitando de paso que los acusen de blandos.

A este respecto conviene recordar los marcos interpretativos (*frames*) identificados por George Lakoff con las dos metáforas retóricas que simbolizan los dos polos opuestos del espectro ideológico: la figura del padre tolerante, adalid del pensamiento progresista, y la del padre estricto, que identifica al pensamiento conservador. Es decir, el gobernante blando y permisivo frente al hombre fuerte o tipo duro. Pues bien, en épocas de bonanza económica y confianza en el futuro, las poblaciones tienden a preferir ser gobernados por *padres* tolerantes y progresistas, mientras que en épocas de crisis, inseguridad y temor al futuro prefieren colocarse bajo la protección de un gobernante autoritario y conservador. Es lo que estaría ocurriendo ahora, cuando las autoridades se refugian tras el escudo de la austeridad para infundir alguna seguridad a una ciudadanía desorientada por la incertidumbre. De ahí a recurrir al castigo indiscriminado como imagen de dureza autoritaria no hay más que un paso, que los gobernantes tienden a dar.

Pero esto realimenta un nuevo círculo vicioso, pues la política de austeridad genera a su vez mayor pobreza e inseguridad, reforzando así el miedo de la población y por tanto la demanda de autoridad. Y en cuanto los gobiernos lo advierten, en seguida se habitúan a elevar la escala del castigo y el sacrificio, con lo que aumenta el nivel de miedo e incertidumbre y se acrecientan por tanto las demandas de fortaleza y autoridad. Con ello los gobiernos se hacen adictos a la práctica del sadismo económico esgrimido contra sus poblaciones, a las que se somete a un espartano régimen de austeridad fiscal por ineficaz que resulte y cualquiera que sea el precio que la ciudadanía haya de pagar por ello. Y como les ocurre a los adictos, pronto alcanzan su umbral de tolerancia, debiendo escalar la dosis de austeridad para recuperar su autoridad. A esta adicción gubernamental al castigo de sus poblaciones se la puede etiquetar como política de intimidación punitiva².

² Véase mi texto titulado “La política de la intimidación”, correspondiente a la ponencia pronunciada en el XII Foro sobre Tendencias Sociales de la Fundación Sistema, celebrado en la UNED el 23 de marzo de 2012, de próxima publicación.

3. Socialización del sufrimiento

En suma, cualquiera que sean sus razones últimas (desde el saneamiento económico a la obediencia debida al directorio europeo), la política de la austeridad a ultranza también se ejerce para reafirmar el poder y la autoridad del gobierno de turno mediante el castigo indiscriminado a su población. Es la estrategia de socialización del sufrimiento teorizada en 1995 por ETA dentro de la célebre ponencia *Oldartzen*, que generalizaba la posibilidad de ser objeto de atentados mortales al conjunto de la población, periodistas y políticos incluidos, y no sólo a las fuerzas armadas y demás autoridades ocupantes de Euskadi. Así esperaba ETA recuperar todo su poder e influencia tras la grave caída de su cúpula dirigente en Bidart. Pues bien, eso mismo es lo que parece buscar como objetivo estratégico la política de austeridad como castigo indiscriminado destinado a intimidar a toda la población: socializar el sufrimiento entre todos los sectores sociales a fin de recuperar el poder y la autoridad perdidos a causa de la crisis.

Con ello nos adentramos en un terreno mucho más vasto, pues desde mucho antes de que Hobbes lo teorizase en su *Leviathan*, los gobiernos siempre han recurrido a la política del miedo y el temor para dominar mejor a sus poblaciones. Así que la variante del castigo indiscriminado que ejercen las políticas de austeridad no sería más que una especie dentro de un género mucho más amplio, el de las políticas de amedrentamiento e intimidación que distribuyen el temor y socializan el sufrimiento con fines políticos entre toda la población.

En principio, el común denominador a todas las variedades políticas de intimidación, como su propio nombre indica, es la diseminación de una cierta dosis de temor inducida desde el poder, que inocular el virus del pánico para contagiarlo a toda la población. Es lo que Paul Virilio ha denominado la administración del miedo, en el doble sentido de que las administraciones públicas gobiernan mediante la política del miedo y de que se administra a las poblaciones dosis terapéuticas de temor. Para ello se cuenta con todo el poder de difusión masiva que proporciona el alarmismo mediático de los medios informativos y las llamadas redes sociales³. Pero ¿por qué, el miedo? O mejor dicho (parafraseando a Lenin), ¿temor, para qué? ¿Cuál es su sentido último?

El filósofo Antoni Doménech lo ha expresado muy bien al recuperar un refrán tradicional que condensa todo su sentido: “lo poco espanta, lo mucho amansa”. La intimidación selectiva que afecte sólo a unos pocos, a una parte minoritaria de la población (los parados, pongamos por caso significativo), sólo despierta horror, piedad, compasión y una cierta indignación que podría derivar en resistencia organizada. Pero no altera demasiado al conjunto de la población porque no conmueve a la opinión pública ni crea o transforma nuevos climas de opinión. En cambio, la intimidación colectiva, entendida como socialización del sufrimiento, sacude tanto a las conciencias que altera la opinión pública creando un nuevo clima de opinión rayano en la impotencia generalizada. Y aunque también puedan surgir movimientos de protesta popular organizados por minorías activistas, este clima depresivo conduce a la mayoría silenciosa al conformismo y la resignación: es la espiral del silencio teorizada por Noelle-Neumann.

³ He analizado la realimentación circular entre el doble alarmismo político y mediático en mis libros *El miedo es el mensaje* (2003) y *Crisis crónica* (2009).

4. Variedades de intimidación

En suma, la socialización del castigo indiscriminado conduce a la domesticación o amansamiento del público en general. Ahora bien, más allá de este denominador común, ¿qué variedades o especies cabe reconocer dentro del género de la intimidación política? Una forma de clasificar las intimidaciones es por el objeto específico del temor que infunden⁴. ¿A qué o a quién se tiene miedo, o se sugiere e induce tenerlo? Como veremos, la mayor parte de los populismos se fundan en la inducción del temor al otro u otros, designados como enemigos culpables del pueblo inocente, ya sea un enemigo exterior (xenofobia) o interior (endofobia). Pero también se las puede clasificar alternativa y simultáneamente por el sentido temporal del temor infundido, según que la fobia, el temor o la aversión al riesgo se abriguen respecto del pasado, del presente o del futuro. Es el método clasificatorio que utilizaré aquí, distinguiendo entre la intimidación punitiva, que infunde temor al castigo por el pretérito daño causado; la intimidación terapéutica, que administra el miedo a los males del presente; y la intimidación preventiva, que pretende vacunar contra los riesgos futuros.

La intimidación punitiva se funda en la política de la venganza, que pretende ajustar las cuentas, devolver los golpes y reparar los daños sufridos en el pasado. De ahí que exhiba un ánimo vindicativo y justiciero, persiguiendo culpables designados como enemigos del pueblo a los que poder sacrificar como chivos expiatorios a fin de castigarles en venganza por los crímenes antisociales que se les imputan. Es la estrategia victimista practicada por el populismo antes citado, que se traduce en la política del resentimiento contra cualquier enemigo interior o exterior (Burrin, 2006), dentro de la dialéctica del amigo y el enemigo teorizada por el jurista del nazismo Carl Schmitt.

La fobia actual contra los presuntos enemigos externos se polariza en recíproca hostilidad entre el norte y el sur, pues el populismo de los países protestantes acreedores inculpa de la crisis al despilfarro deudor de los países católicos meridionales (los PIGS o GIPSI), a los que se castiga como penitencia para que rediman sus culpas (*schulden*) pagando sus deudas (*schulden*), mientras el populismo simétricamente inverso de estos últimos culpa de la crisis al rigorismo usurario de los países protestantes, que en lugar de perdonar nuestros pecados nos incrementan las deudas y con ellas las penas. Y la fobia contra los enemigos internos se manifiesta dentro de cada país por la animadversión contra los presuntos culpables de la crisis: desde los banqueros, los políticos y los corruptos, denunciados por el populismo izquierdista, hasta los sindicatos, los socialistas y los funcionarios, inculcados por el populismo reaccionario.

Pero también hay otros enemigos transfronterizos, a la vez internos y externos, acusados de actuar como traidores que le dan una puñalada por la espalda al pueblo inocente: es lo que ocurre con los catalanes para los españoles y viceversa, en esta xenófoba trama del ficticio expolio fiscal. Pues habrá de observarse que, con el progreso de la crisis, la hostilidad fóbica se está desplazando desde el eje vertical de la lucha de clases, que opone a los de *arriba* (la élite, los privilegiados, la clase política) frente a los de *abajo* (el pueblo, las clases desfavorecidas, la ciudadanía), al eje horizontal del conflicto territorial e identitario: protestantes *versus* católicos, nórdicos *vs.* mediterráneos, catalanes *vs.* españoles, autóctonos *vs.* inmigrantes, etc.

⁴ A partir de aquí desarrollo y amplío argumentos ya contemplados en mi artículo “Epidemias de miedo. De la fobia al amedrentamiento”, *Claves de Razón Práctica*, núm. 222, pp. 44-55, mayo de 2012.

Y en estos casos lo que se pretende es castigar a los presuntos culpables por puro resentimiento, para hacerles pagar a ellos el precio del propio daño sufrido aunque semejante ajuste de cuentas resulte perjudicial y económicamente contraproducente. De este modo el afán de venganza desplaza y sustituye al afán de lucro como fundamento de las decisiones estratégicas, en clara regresión incivil hacia la época barroca de las guerras de religión anterior al siglo de las luces (Hirschman, 1999) en que las pasiones (políticas) dominaban a los intereses (económicos).

5. Terapia preventiva

Quedan las otras variantes de la intimidación, que ya no pretenden castigar el daño cometido en el pasado sino repararlo en el presente y prevenirlo en el futuro. Respecto a la intimidación terapéutica, consiste en todo aquellos sacrificios que se imponen para sanear y regenerar el cuerpo económico. La justificación de esta práctica se basa en la concepción del capitalismo propuesta por Schumpeter como destrucción creativa. Para superar la crisis hay que sacrificar todos aquellos intereses creados o adquiridos (como los derechos sociales mismos) que puedan oponerse a la reestructuración del sistema para convertirlo en más productivo, rentable, innovador y eficiente. De este modo, para restablecer el crédito de los países endeudados, hay que someterlos antes a una cura de caballo, consistente en una devaluación interna con fuerte ajuste de la producción, el empleo y el consumo con intensa deflación sostenida tanto de precios como de rentas.

Y eso cualquiera que sea el precio que haya de pagar la población, en el bien entendido de que su sacrificio será por su propio bien por costoso que resulte. Estamos por tanto en pleno renacimiento de la biopolítica, según la teorizó Michel Foucault como técnica del gobierno del despotismo ilustrado⁵. Aunque naturalmente tengamos derecho a desconfiar de que semejante práctica terapéutica beneficie a todo el cuerpo social, pues bien pudiera suceder que el sacrificio de la mayoría sólo sirva para restablecer e incrementar la tasa de beneficios de la élite privilegiada, dado el brutal crecimiento de la desigualdad económica que se está produciendo a causa de la crisis. Este es el verdadero sentido de la administración del miedo denunciada por Virilio.

Queda, en fin, la tercera variante de la política de amedrentamiento: la intimidación preventiva. Hemos visto que los sacrificios de los países del sur se justificaban como una especie de merecida penitencia punitiva, impuesta como justo castigo a las desviaciones económicas cometidas en el pasado. Pero también hay otra forma alternativa de ver las cosas. El motivo principal que explica la imposición de este castigo indiscriminado no es el afán de castigar las evidentes desviaciones pretéritas sino la conveniencia de prevenir los posibles desvíos futuros (más que probables, a la luz de la experiencia anterior). Es lo que se conoce como teoría del riesgo moral (*moral hazard*): la versión económica de los problemas de acción colectiva que los sociólogos englobamos bajo el concepto de dilema del gorrón o parásito (*free rider*). Un dilema que sólo

⁵ Curso de 1975-1976 en el Collège de France. La transcripción del curso fue publicada bajo el título *Hay que defender la sociedad*, y su análisis fue proseguido en los años siguientes por los cursos *Seguridad, territorio, población* (1977-1978) y *Nacimiento de la biopolítica* (1978-1979). Todos ellos traducidos al castellano y publicados en Madrid por la Editorial Akal (en 2003, 2008 y 2009, respectivamente).

puede resolverse conjugando las zanahorias (incentivos positivos) con los palos (incentivos negativos).

En suma, el *moral hazard* explica que los rescates de los países del sur (los PIGS) sólo se otorguen con una estricta condicionalidad (registrada contractualmente en los célebres MoU: memorandos de compromiso), que siempre acarrea un duro castigo social. Pues el rescate sin castigo (o la zanahoria sin palo) equivale a una licencia para endeudarse sin tasa, lo que estimula al país gratuitamente rescatado a volver a asumir nuevos riesgos de mayor insolvencia futura. Y el mejor modo de evitarlo es la de advertir que todo rescate tendrá un precio. De ahí la intimidación preventiva, basada en el temor a recibir en el futuro más palos que zanahorias si se incumplen los contratos.

O sea que quien quiera zanahorias tendrá que estar dispuesto a cobrar muchos palos. Es la estricta disciplina luterana según el método descrito en el film *La cinta blanca* (Michael Haneke, 2009), que marca a los deudores con el estigma de los pecadores para que aprendan a hipotecarse en el futuro con mayor rigor y solvencia: la letra con sangre entra. De este modo, las poblaciones así sacrificadas aprenderán una dura lección que no podrán olvidar en mucho tiempo: la de que todo compromiso crediticio debe ser devuelto con creces antes o después, so pena de incurrir en un coste adicional imposible de sufragar.

6. Autofobia e impotencia

Pero no quisiera terminar esta intervención sin comentar una consecuencia moral de la política de intimidación. Y es que si bien la intimidación punitiva es a la vez causa y efecto de la xenofobia, entendida como odio y temor a *los otros*, la intimidación preventiva, en cambio, genera endofobia y autofobia. La endofobia es el odio y el miedo a *los nuestros*: el gobierno, la clase política. Y la autofobia es el miedo y el odio a *nosotros* mismos: el pueblo, la ciudadanía.

En efecto, el populismo victimista y vindicativo genera una clara fractura social entre nosotros y ellos: el otro u otros. Y no es de descartar que la creación de *cleavages* como los que hemos visto (europeos del norte contra europeos del sur, protestantes contra católicos, autóctonos contra inmigrantes, catalanes contra españoles, etc) sea quizás el principal objetivo de la política de la intimidación: *divide et impera* (divide y vencerás). De este modo, la intimidación punitiva genera fracturas xenófobas que dividen y fragmentan a las clases populares anulando su capacidad de organización y resistencia. Es así como la conflictividad vertical de la lucha de clases se ve desplazada y sustituida por la conflictividad horizontal de la lucha de territorios e identidades, según hemos visto antes.

Pero esta fobia contra los otros también se hace en defensa del nosotros, que resulta en consecuencia reforzado y robustecido como una forma de ocultar y encubrir todos sus conflictos y fracturas internas, según revela la unitaria euforia colectiva desatada en Cataluña tras la Diada del 11 de septiembre. Es la versión constructiva e integradora del populismo que ha teorizado Ernesto Laclau, a partir de la agregación de identidades dispersas que se unifican para organizar su resistencia antagónica contra la élite del poder como enemigo común: el pueblo unido jamás será vencido. Y buenos ejemplos recientes de resistencia popular contra un régimen que reprime, recorta o deroga los derechos ciudadanos los tenemos en la *primavera árabe*, la movilización de los indignados el 15-M de 2011 (y su posterior secuela de la Cumbre Social el 25-S de

2012) y la masiva manifestación portuguesa del 15-S, cuando el pueblo unido obligó al gobierno de Passos Coelho a rectificar momentáneamente su política de austeridad.

Ahora bien, la política de la intimidación no sólo desata la fobia contra los otros o contra los nuestros (la clase política que incumple su compromiso de defender los derechos de sus representados), sino que también puede generar autofobia, si despierta la fobia contra nosotros mismos. Es el caso de la intimidación terapéutica y preventiva, que tiende a suscitar entre toda la ciudadanía la mala conciencia de sentirse colectivamente culpable, lo que le lleva a avergonzarse de sí misma. Así reza el mantra que ha tomado carta de naturaleza en la opinión pública, tras darse por sentado como causa última de la crisis que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Este síndrome ideológico, reaccionario y en el fondo religioso (dado que remite al mito de la caída o pecado original) no sólo es deliberadamente desmovilizador, como pretenden quienes lo vienen propalando, sino que además genera una profunda desconfianza civil y pública.

En efecto, culpabilizar al nosotros colectivo como principal responsable de la depresión social y económica no sólo nos hace sentirnos avergonzados de nosotros mismos, rebajando y degradando nuestra autoestima colectiva, sino que además nos conduce a la desmoralización, el sometimiento y la impotencia, anulando las escasas reservas restantes de capital social y confianza cívica. Justo lo peor que nos podía pasar cuando debemos intensificar los esfuerzos colectivos para sobreponernos a la crisis recesiva desatada por la austeridad gubernamental que nos imponen, luchando contra ella para tratar de superarla aminorando cuanto se pueda sus peores daños irreparables.

Y para eso hace falta voluntad, decisión, solidaridad, espíritu de equipo y capacidad de iniciativa, fuerzas sociales todas ellas que demandan una gran confianza en nosotros mismos y en los demás conciudadanos nuestros. Por ello, para evitar que nos quiebren la moral con su humillante política de intimidación preventiva, hace falta reaccionar a tiempo, reconstruyendo entre todos nuestra confianza en un posible y mejor futuro común. Juntos, podemos.

Referencias citadas

- Philippe BURRIN: *Resentimiento y apocalipsis. Ensayo sobre el antisemitismo nazi*, Katz, Buenos Aires, 2006
- Antoni DOMÈNECH: *Seminario de filosofía en Buenos Aires* (13-04-08), <http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1791>
- Enrique GIL CALVO: *El miedo es el mensaje. Riesgo, incertidumbre y medios de comunicación*, Alianza, Madrid, 2003.
- Enrique GIL CALVO: *Crisis crónica. La construcción social de la gran recesión*, Alianza, Madrid, 2009.
- Albert O. HIRSCHMAN: *Las pasiones y los intereses*, Península, Barcelona, 1999.
- Ernesto LACLAU: *La razón populista*, FCE, Buenos Aires, 2005.
- George LAKOFF: *No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político*, Foro Complutense, Madrid, 2007.
- Elisabeth NOELLE-NEUMANN: *La espiral del silencio*, Paidós, Barcelona, 1995.
- Carl SCHMITT: *El concepto de lo político* [1932], Alianza, Madrid, 1991.
- Paul VIRILIO: *La administración del miedo*, Barataria, Madrid, 2012.

La crisis de la norma social del empleo: entre la estabilidad imaginada y la nueva pobreza

Luis Enrique Alonso Benito

Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Sociología



“La desigualdad es, en gran medida, consecuencia de unas políticas gubernamentales que configuran y dirigen las fuerzas de la tecnología y de los mercados, y de las fuerzas sociales más en general” [...]. Si nuestra democracia funcionara mejor tal vez habría conseguido resistirse a la demanda política de una desregulación y probablemente habría respondido a la debilidad de la demanda agregada con medidas que fomentaran el desarrollo sostenible en vez de crear una burbuja”

Joseph E. Stiglitz (2012: 133y 143)

“La pobreza no puede definirse en sí mismo y por sí mismo como un estado cuantitativamente determinado, sino solo en función de la relación social que nace de una situación específica”.

Georg Simmel (2011: 87)

Introducción

A partir de los años setenta hemos vivido una intensa destrucción de las normas sociales que habían construido la realidad laboral en los años de postguerra y posterior crecimiento sostenido. Las primeras manifestaciones de la crisis del modelo fordista -su saturación tanto en el procesos de trabajo como en los mercados de bienes- se produjeron en forma de reacciones *defensivas* ante la pérdida de los márgenes de utilidades de los agentes económicos, de esta forma el estancamiento con inflación era el modo inédito en que expresaba un bloqueo de las posibilidades de crecimiento del modo de regulación fordista y este bloqueo se acaba dirigiendo hacia los mercados de trabajo. Primero generando una fuerte y rápida expansión de los niveles de desempleo -comparados con las tasas de paro, en algunos años casi testimoniales, del período inmediatamente anterior-, luego destruyendo las regulaciones que el contexto socioeconómico keynesiano había construido sobre el factor trabajo como equilibrio sociopolítico a nivel (macro) del modo de organización (micro) taylorista y fordista del proceso de trabajo (Aznar 1998).

En todo caso estas situaciones de mediados-finales de los años setenta y principios de los años ochenta, mostraban estrategias de defensa de posiciones históricas con conflictos por la distribución de la renta resueltos en formas de espirales de inflación y recrudecimiento del desempleo que en estos momentos empieza a ser conceptualizado como masivo. La flexibilidad es así considerada también en estos primeros años de la crisis como una simple *flexibilidad defensiva*, una forma de desregulación normativa y de endurecimiento de las condiciones de contratación del trabajo -sobre todo en el nivel salarial- utilizando los efectos disciplinarios de crisis para intentar recomponer la tasa de ganancia. La flexibilidad se presentaba así como la manera de introducir el mercado en sectores que habitualmente habían estado "sujetados" en sus precios y controlados en sus acciones por las instituciones implícitas del pacto keynesiano (salarios pactados en la política de rentas, empresas públicas, consumos públicos, etc.) justamente porque estas instituciones estaban diseñadas en la lógica keynesiana para evitar la crisis de demanda, y aquí la economía daba todos los síntomas de una crisis de oferta (de encarecimiento relativo de los factores).

Pero una vez que este turbulento y conflictivo período se iba asentando, lo que se venía anunciando

como indicio en dicho período se descubre con una claridad meridiana y éste es que un nuevo modelo de organización de la producción, con una nueva institucionalización de la forma de empleo, se estaba conformando rápidamente. Una nueva organización productiva se desplegaba así en el contexto de una contundente liberalización y globalización de la economía, realizada sobre soportes tecnológicos y financieros de importancia creciente, en constante y acelerada renovación, y con el discurso de la competencia, la incertidumbre y el riesgo como referente metafórico "totalizador" de lo que es la vida económica (Harvey 1989, 2007). Un conjunto de profundos cambios en los procesos de trabajo y en las estrategias comerciales de las empresas autorizan a hablar de un *modo de regulación postfordista*, en el que las bases sociales que se incrustan en el origen mismo de la acumulación económica son radicalmente removidas, sobre todo en su punto nodal, en las condiciones de vida y trabajo de la población asalariada.

1. Crisis de la ciudadanía laboral y desestructuración de las formas de empleo: la anomia postfordista

Desde mediados de los años ochenta la lógica postfordista ha debilitado la política de precios adaptada a formas de demanda predecibles, relativamente estables y en muchos casos estatalmente sostenidas. Las formas de organización tratan, por tanto, no sólo de utilizar las economías de escala o la competencia en costes en la producción, sino de manejar -sobre todo en las industrias punteras- la calidad, la diferenciación y personalización del producto, el tiempo en que se sirve este producto, etc. La adaptación a un entorno no predecible y con exigencias rápidamente cambiantes hace que todo elemento relativamente inmovilizado en el proceso productivo -*stocks*, recursos financieros, y sobre todo trabajo contratado- y que no puede fluctuar siguiendo casi de manera milimétricamente el ciclo de negocios, sea considerado una rémora para la actividad natural de la empresa. La flexibilidad pasa así de una simple estrategia defensiva a una necesidad de primer orden una exigencia para mantenerse en el pie forzado de la competencia (Sennett 2000 y 2006).

Sólo reseñaremos someramente algunas dinámicas que tienen una especial incidencia en los procesos de movilización y remoción de la condición salarial de este modo de regulación postfordista y lo que es su dispositivo cognitivo (e ideológico) fundamental: la flexibilidad. De este modo, a partir de un marco sectorial totalmente renovado, las economías occidentales conocen el declive relativo de las industrias de producción mecánica tradicionales y su sustitución en la hegemonía de las decisiones empresariales por las actividades de servicios, de innovación tecnológica, de telecomunicación y de intermediación financiera, un redespiegue de funciones interno y externo a las empresas que complejiza hasta hacer estallar las formas de organización en línea de origen taylorista-fordista (Alonso 1999, 2007).

El discurso de la competitividad se hace así total, tanto en el espacio: la globalización (la ruptura del pacto keynesiano a nivel territorial), como en el tiempo -aceleración de los ritmos de rotación y renovación de los factores-, como entre las personas -competencia por el puesto de trabajo- o entre las ciudades y regiones; desapareciendo con todo ello la posibilidad de utilizar las políticas estatales de sostenimiento de la demanda encaminadas a ordenar el crecimiento económico y garantizar una

cierta estabilidad de las rentas salariales por la vía de las políticas redistributivas. Lo público, así, como frontera social del capitalismo tiende a disolverse o limitarse y el Estado de bienestar keynesiano desmercantilizador a reducirse para dar paso a un Estado remercantilizador -un *Workfare State*- creador de las condiciones para la competencia mercantil y, por tanto, reprivatizador y garante del principio de la rentabilidad y la ampliación permanente de los mercados (Jessop 1994).

Las empresas han rediseñado sus procesos productivos descentralizando y externalizando las actividades no nucleares; frente el incremento de las jerarquías, incorporaciones y "manos visibles" fordistas, pasamos a las desincorporaciones, el estímulo de la economía de los contratos y las transacciones, y, en último término, a la organización de la producción dentro de una red de empresas y pequeñas empresas concretadas en unidades territoriales de muy variada escala (Boyer y Freyssent 2000). Si el incremento de escala la integración vertical para controlar y administrar mercados era la estrategia fordista en épocas de demanda creciente (e incluso estatalmente estabilizada), la gran metáfora postfordista es la red, la diseminación y redimensionalización de tareas en un sistema de funciones desplegadas por el principio de la búsqueda de la menor resistencia al mercado posible y, por lo tanto, a la consecución de rentabilidades puntuales en todos y cada uno de los nudos de la red productiva, utilizando de manera bien diferenciada los recursos productivos y fundamentalmente el factor trabajo en cada nudo para adaptarse a cada mercado particular en condiciones de rentabilidad: contratos y transacciones tratan así de minimizar los costes de coordinación y motivación que las grandes estructuras industriales incluido el Estado industrial, según esta lógica, habían sobrecargado.

Las repercusiones para el trabajo asalariado de estos modelos organizativos son espectaculares variando de manera radical del núcleo de actividad a las actividades subcontratadas, periféricas o en *outsourcing*, donde las situaciones laborales se mueven en diversidad e inestabilidad cercanas a la turbulencia continuada (Alonso y Martínez Lucio 2006). De esta manera a mercados internos y especiales de trabajo, ligados a los núcleos centrales de las empresas -casi siempre bien defendidos contractualmente y estructurados sobre una ventaja comparativa, sea cualificación, capacidad de acción colectiva, historia profesional, etc.- se asocian horizontal y verticalmente un elevadísimo número de empleos *atípicos*-con condiciones de contratación socialmente defectuosas e inestables- usados tanto para abaratar la cadena productiva general como para poder responder a las fluctuaciones rápidas que presenta la coyuntura comercial.

Hemos conocido, por tanto, la transición entre el modelo productivo en masa de la *mano visible* -con un esquema jurídico de reconocimiento y visibilización también de derechos laborales fijados y prefijados sobre todo en el ámbito de las grandes empresas-, ligadas a la demanda de grandes volúmenes de producción y a la obtención de economías de escala para amortizar grandes inversiones y generar rentabilidad a medio plazo; y una *empresa flexible* y de rápida innovación y acelerado cambio técnico, volcada en la adaptación a las diferencias y segmentos de un mercado especialmente fragmentado, donde la lógica económica correspondiente no es tanto la búsqueda de economías de escala, como la de las economías de organización y gestión de los recursos. Y en esta transición se han invisibilizado y debilitado hasta la volatilización gran parte de las seguridades jurídicas que construían la norma de trabajo, con ello los sistemas salariales, y de incentivos, la

duración de los contratos y la estructura y agentes de la negociación colectiva han estallado en un conjunto completísimo de dinámicas que tienden a la fragmentación -hasta la personalización- y a la pérdida en gran parte de los eslabones y actividades de la cadena productiva, de referentes colectivos o de mecanismos institucionales de defensa (Cohen 2000).

Sin referencia pública -o estando ya limitada por la imposibilidad de intervención que ahora colisiona con la estricta ortodoxia de la competitividad, la remercantilización y la desregulación- *la cultura del trabajo* -como relación jurídica a largo plazo que plantea un proyecto vital- pasa a disolverse en una constelación de empleos, tomados como microcontratos de servicios individualizados y adaptados a las necesidades del negocio -en volumen y tiempo- de las empresas (Lash y Urry 1987). El déficit público se convierte así en la dimensión más penalizada por los mercados financieros internacionales -globalizados, anónimos y volátiles- dominadores de las políticas económicas posibles en los territorios. Con ello las políticas sociales de todo tipo (desde las laborales hasta las de sanidad, pasando por pensiones y subsidios de desempleo) se muestran siempre el primer elemento a reducir y minimizar en los procesos de cirugía, saneamiento y ajuste económico de los gobiernos. El keynesianismo como política, y el pacto keynesiano, como orden negociado entre los representantes corporativos del proceso de trabajo, se declaran, pues, oficialmente como obstáculos definitivos para mantener la competitividad de las naciones e ineficientes de cara a conseguir la flexibilidad imprescindible para entrar en las bandas rentables de la economía mundial.

2. La era de la fragmentación: la precarización como norma

La sociedad del trabajo keynesiano-fordista, en suma, se fractura por múltiples líneas horizontales, verticales y temporales, siempre tendentes a la individualización y despolitización de las relaciones laborales, dejando parcialmente desactivados los mecanismos tradicionales de la negociación colectiva y a las organizaciones sindicales que se estabilizaron y se institucionalizaron en ella. La fractura horizontal se abre así entre el centro y periferia laboral, entre el núcleo corporativo de las empresas y la actividad subcontratada, entre los mercados internos y los mercados externos, en una línea de discontinuidad que impone barreras y relaciones laborales diferenciadas y desiguales entre los buenos y los malos trabajos; una dualización que reduce los trabajos industriales y administrativos intermedios para defender y blindar los trabajos de alta cualificación en el campo de la intermediación financiero, la innovación tecnológica o la estrategia empresarial, a la vez que se multiplican y debilitan los empleos degradados tanto en el sector de servicios directos específicamente, como en la convención general de considerar en esta franja todos los empleos como un contrato por obra y servicio, sin más compromiso ni obligaciones. Poco queda ya, por tanto, de la escala de ocupaciones fordistas definida como un continuo con retribuciones crecientes según se ascendía por ella, pero con derechos formales prácticamente homogéneos a lo largo de la escala.

La debilitación del sentido social y jurídicamente construido del trabajo en un proceso que coincide con la centrifugación de las relaciones laborales en tratar de retirar el mayor número de efectivos posibles de la negociación colectiva, impone también una ruptura en la línea de incentivos que inmediatamente verticaliza, jerarquiza e incrementa la desigualdad entre posiciones en el proceso

de trabajo. Así, por arriba los técnicos que en la época keynesiana habían construido en sus dinámicas de formación y defensa de intereses colectivos en la negociación alianzas con las organizaciones de clase históricas, se separan ahora del pacto tomando la forma de "*analistas simbólicos*" -definidores del uso de la información y la estrategia- buscando promoción e incentivos totalmente individualizados y entrando en agresivas carreras que a la vez que aseguran su mejor posición en la organización tiende a empeorar la posición de los demás, especialmente los más débiles e incapaces de defenderse por sus cualificaciones o situación en la empresa (Lash y Urry 1994).

Por abajo, la precarización, movilización e inseguridad generalizada e institucionalizada hace de la mera supervivencia el incentivo central, pero incentivo igualmente perverso, individualizador y atomizador del mundo del trabajo. La volatilidad y falta de organización macroeconómica del modelo postfordista -un capitalismo desorganizado que funciona en clave meteorológica- acaba formando dos tipos de flexibilidad social, una *flexibilidad interna* que individualiza, relanza y aplica situaciones de mercado restringido a los profesionales que tratan de desgajar su capital humano del resto de los capitales sociales de la producción, para así poder hacerlo más rentable según el ciclo de negocios; y una *flexibilidad externa*, pura aplicación del darwinismo social a las formas más elementales, turbulentas e inseguras de empleo contratado, construidas entre el desempleo estructural y el malempleo cíclico y generando exigencias cognitivas y de cualificación muy bajas allí donde pueden ser eliminadas ocupaciones tradicionales estables (Gallino 2002).

Por fin, la ruptura generacional del mercado laboral implica la fragmentación de los ciclos de vida personales en el trabajo. La biografía productiva fordista era un continuo que discurría entre una incorporación relativamente temprana al trabajo corriente y una jubilación relativamente también tardía de la vida activa en una trayectoria levemente ascendente dentro de una misma empresa o con mínimos cambios entre categorías muy homogéneas. El panorama postfordista es muy diferente, en los niveles altos de ocupación la rotación y el salto de empresas aumenta al desvincularse en gran medida la idea de profesión a la idea de organización estable, en una trayectoria que primero convirtió al profesional liberal en profesional funcional (al servicio de una gran organización económica) y de este profesional funcional hemos ido pasando al profesional mercenario -vendedor de estrategias a corto plazo de una organización a otra-; pero a nivel cuantitativo es en los niveles más bajos de las escalas profesionales o en los mercados *externos* donde los ciclos biográficos se fracturan y fragmentan en permanentes entradas y salidas del empleo regular, aparcamientos y relaciones parciales con las ocupaciones regladas (Cingolani 2005). Conocemos así el esplendor del trabajo inestable, con cambios permanentes de ocupación y utilidades ambiguas o directamente fraudulentas de las disposiciones normativas y contractuales (falsos becarios, falsos autónomos, falsos parados subsidiados, falsos jubilados etc.), todo ello circunscribiendo un mercado "balcanizado", institucionalmente desorganizado y generador de *riesgos* sociales permanentes (desempleo, exclusión social, "desafiliación" o nueva pobreza como pérdida de las relaciones estables con la sociedad) que el individuo capaz, debe saber internalizar y gestionar, por sí mismo, en una aceleración de su disponibilidad y adaptabilidad a las exigencias del nuevo y cambiante mundo del trabajo.

La *cultura de la satisfacción* de los beneficiados por la desregulación, la desfiscalización y la

privatización postfordistas -con un fuerte incremento de los consumos de élite, promocionistas, ostentosos y de representación individual (Galbraith 1992, Alonso 2005)- se combina así con su otra cara, la de los inestables, excluidos y supervivientes en trabajos "socialmente no deseables" (ocupados por inmigrantes, refugiados, desplazados, o incluso en otros aspectos por los discapacitados) y con modos de vida, no tanto de pobreza patrimonial o estática como de exclusión dinámica o de desigualdad de acceso y limitación de capacidades en el orden social, aunque manteniendo -por sus posibles ingresos inestables- niveles de consumo reales, pero en cierto modo estigmatizantes al quedar en el ámbito del consumo sin signo o de la *pobreza funcional*, de los que existen sin más proyecto de futuro en los márgenes del mercado de trabajo.

Si el trabajo -como hemos dicho ya- es por definición es un conjunto de empleos unificados por un estatuto institucional, al ser siempre el cruce entre una situación económica, normativa y social; en el postfordismo al perder unidad institucional el trabajo, los empleos se multiplican y fragmentan de tal modo que en el modo de regulación postfordista el trabajo se disuelve en muchos casos en la desformalización de su propia imagen social, al desdibujarse el tramo de edad y la figura de sujeto activo al que podemos atribuirle la condición laboral (Alonso y Martínez Lucio 2006). Las convenciones sobre la condición laboral considerada oficialmente se amplían y remodelan, (o se restringen y maquillan, en las estadísticas al uso según las coyunturas políticas) a la vez que se disparan las trayectorias en el mercado de trabajo. El modelo de trayectoria lineal "tipo fordista" - mayor nivel educativo formal garantizaba mejor posición en la jerarquía laboral a la vez que la antigüedad laboral se correlacionaba positivamente con mayor seguridad- se descompone en *trayectorias* muy personalizadas donde los títulos académicos se consideran muchas veces condición necesaria, pero en ningún caso suficiente ni garante de trabajo o carrera profesional y donde en todo caso la ralentización y dificultad de esas trayectorias hace que un gran grupo de los efectivos -los que no tienen capital social o relacional- pasen a ser parte del sector más débil y sumergido (o semisumergido) de la sociedad del riesgo; los tiempos líquidos han terminado con la seguridad de la ciudadanía laboral como norma mayoritaria de incrustación social (Du Gay 1997, Bauman 2007a).

La multiplicación de trayectorias *divergentes* en el mercado de trabajo chocan y se encuentran con las propias contradicciones que engendran las estrategias defensivas públicas y privadas establecidas como forma de salir del atolladero del desempleo. Así, los aumentos en el nivel educativo, ya sea como enseñanza reglada exigida, ya sea como inversiones privadas en capital humano, pueden inmediatamente aliviar la presión sobre el mercado de trabajo (y las estadísticas de desempleo) generando los famosos efectos aparcamiento -estudiar por no tener donde trabajar-, pero a la vez construye las líneas de deseabilidad de los empleos y la normalidad social del trabajo dejando fuera los trabajos manuales, industriales o los oficios tradicionales que quedan devaluados frente a la imagen estereotipada del trabajo administrativo o la profesión universitaria como únicas ocupaciones que colman las aspiraciones laborales y el nivel de estatus troquelado por un sistema educativo modelado por, a su vez, la idea de carrera profesional. El honor estamental adquirido en el estudio provoca la indeseabilidad de los puestos de trabajo que no se ajusten a las expectativas de estatus creadas (Lallement 1999, 2007).

Los altos niveles de desempleo en las franjas de edad y los grupos sociales especialmente débiles o

frágiles (con referencia especial a los inmigrantes), así como la concentración en estas mismas franjas del empleo precario, temporal o estacional, expresan la práctica de la organización postmoderna de fragmentar y desintegrar las bases sociales del trabajo, hasta conseguir las condiciones más favorables para su rentabilidad acudiendo sistemáticamente a la pseudocontratación individualizada de recursos que se muestren de la forma más libre -menos defendida socialmente- posible (Castel 2003). Sólo algunas trayectorias triunfantes -apoyadas sobre su origen de clase, especiales valores meritocráticos o ciclos muy expansivo de las empresas- rompen el blindaje de los mercados de trabajo internos y las carreras profesionales defendidas. El resto se despliega desde el ostracismo y la minimización de las trayectorias obreras tradicionales sostenidas sobre una solidaridad familiar, hasta las instalaciones masivas en el subempleo de precariedad o en los subcontratos como forma provisional de vida y falso alargamiento social de la juventud "oficial", pasando por las trayectorias de marginación total o las desarrolladas en *aproximaciones sucesivas*, esto es en el paso por sucesivas posiciones en el proceso productivo -muchas veces con períodos de desocupación en el tránsito- con ensayo y fracaso parcial y que acaban mediante un largo -cada vez más- período de inestabilidad, prolongación de estudios y sustento familiar, acercándose a los núcleos corporativos de las organizaciones en un proceso ralentizado de permanente puja personal por puestos definidos por su inestabilidad radical, con fecha de caducidad y con el peligro permanente de que en cada salto se produzca una caída en el "fuera de mercado" total. Como dice Ulrich Beck (2012): "Cuanto más se desregulan y flexibilizan las relaciones laborales, con más rapidez pasamos de una sociedad del trabajo a otra de riesgos incalculables, tanto desde el punto de vista de las vidas de los individuos como del Estado y la política. En cualquier caso, una tendencia de futuro está clara: la mayoría de la gente, incluso de los estratos medios, aparentemente prósperos, verá que sus medios de vida y entorno existencial quedarán marcados por una inseguridad endémica. Parte de las clases medias han sido devoradas por la crisis del euro y cada vez hay más individuos que se ven obligados a actuar como *Yo y asociado* en el mercado de trabajo". .

En suma, la crisis del empleo postfordista (iniciada con un fuerte desempleo que se mantiene en todo el período y continuada con pérdida de la estabilidad y la calidad del empleo realmente existente), indica un cambio de los usos económicos del trabajo, unos usos donde la relación entre crecimiento y creación cuantitativa y cualitativa de empleo se pierde como convención y, por el contrario se consagra la desestabilización sistemática del trabajo en un conjunto de dinámicas azarosas siempre dependientes de las "antileyes" caóticas de los mercados financieros (Triglia 2002). En esta desregulación y desjuridificación del trabajo -hasta convertirlo en empleo individualizado por el que se compite en las distintas colas de mercado de trabajo- los grupos socialmente más débiles han acumulado los costes de un modelo de alta rentabilidad y baja seguridad, y así los grupos socialmente contruidos como secundarios han ido reproduciendo de manera ampliada según su diferente posición socioeconómica las condiciones de desarticulación, balcanización y precarización del mercado de trabajo postfordista, si bien es cierto que hasta la propia idea de trabajo ha estallado definitivamente en trayectorias hacia estilos de vida y empleo muy diferenciadas apoyados en cuotas de capital humano, social, económico, cultural y relacional muy diferenciadas según los diferentes grupos de pertenencia y origen.

Las imágenes sociales de la ciudadanía postlaboral nos remiten a una condición contradictoria entre

las posibilidades de consumo, muchas veces sostenido o financiado con muchos malos trabajos y las escasas garantías sociales en las formas de logro, de autonomía de decisión, de suficiencia económica o de independencia con un proyecto de futuro asociadas a la condición laboral. La condición postmoderna, en resumen, cristaliza en la imagen del individuo como promesa consumista de sus discursos publicitarios, moviéndose eternamente en las turbulencia institucionalizada en el mercado de trabajo, atractor extraño que sólo deja escapar a aquellos que disponen de capitales especiales para pagar el rescate de su emancipación (Bauman 2007b, Alonso 2005).

3. Políticas públicas de intervención en la reconfiguración de la ciudadanía laboral y surgimiento de las nuevas trayectorias laborales: de la flexibilidad como medio a la empleabilidad como condición

El mercado de trabajo está políticamente definido y su funcionamiento lejos de ser natural y espontáneo es el resultado de una legalidad que es, a su vez, producto de la resolución de los conflictos sociales que se libran en la esfera de la distribución de poderes. La traducción en la forma política de los intereses de los agentes económicos reforzados en la salida de la crisis de finales de los años setenta ha consistido desde un primer momento en un despliegue de políticas de *desregulación* del mercado de trabajo: diagnosticada así como una crisis de oferta por las políticas oficiales y haciendo una lectura liberal ortodoxa -neoclásica- del funcionamiento del mercado de trabajo, se descartaron las políticas de aumento del gasto público y se consideró que sólo es la iniciativa privada -en un sentido estricto, la voluntades aisladas y supremas de agentes dispuestos a aceptar riesgos económicos- la que es capaz de generar puestos de trabajo (Stiglitz 2012, Maruani 2002). De este modo las principales políticas de empleo han girado en torno a la incentivación de la movilidad institucional, funcional y geográfica de la fuerza de trabajo, mediante el intento de eliminación de barreras jurídicas de entrada y salida de los mercados de trabajo, con esto se trata de acabar con lo que se ha considerado un exceso de reglas, de burocratización y de control por parte del Estado -y de ciertos grupos de trabajadores- de las condiciones de contratación de la mano de obra, buscando *abaratar* y facilitar así las condiciones de despido y recolocación de los efectivos humanos en el mercado de trabajo.

Políticas de empleo, por tanto, basadas, fundamentalmente, en permitir un uso más libre, flexible o barato -y por tanto desde un punto de vista *exclusivamente mercantil* (de precio) más eficiente- de la fuerza de trabajo y que han tomado rápidamente carta de naturaleza en el entorno productivo empresarial postfordista. Los últimos quince años han sido, por tanto, un largo camino que parece interminable de *reforma* del mercado de trabajo y la condición laboral (nunca lo suficientemente liberalizada si atendemos a las peticiones de las voces más ortodoxas) en donde los países que más habían protegido jurídicamente la estabilidad del trabajo ya empleado, durante el ciclo keynesiano, han acudido a una desformalización de las obligaciones indemnizatorias de los contratos de trabajo, han descargado los pagos y contribuciones sociales de ciertos contratos y, a base de combinar y facilitar todas las modalidades de empleo temporal y de despido sin costes, han creado una amplia lista de contratos efímeros, inestables y con fecha de caducidad prefijada (Supiot 1999 y 2007).

En este contexto, siempre se ha argumentado en el discurso oficial y que luego se ha reforzado

hasta la saciedad con la actual crisis financiera, que los más interesados en la liberalización del mercado de trabajo son los parados y buscadores de empleo, así, en gran medida, las justificadores y legitimaciones de las acciones flexibilizadoras más potentes, se han desplegado siempre en la línea de su funcionalidad para la creación del empleo, de tal manera que la línea general de estas mediadas es crear una serie de contratos sin garantías que se van ampliando en las sucesivas y permanentes oleadas de *reforma/liberalización/flexibilización* del mercado de trabajo. La creación de empleo se asocia así a la facilidad de despido, a la reducción de las cotizaciones sociales y a la subvención y promoción de ciertos tipos de contratos cuya esencia final es la temporalidad. El empleo se vincula en esta lógica exclusivamente al crecimiento mercantil y a la condición mercantil del propio empleo, y así desaparece inmediatamente cualquier referencia a la calidad, tipo, cargas y derechos "internos" en el propio puesto de trabajo. Políticamente todo vale –es la sustitución de la legitimidad política por la legitimidad económica- si reduce las estadísticas de desempleo: la vía de los trabajos de mala calidad –los *Mcjobs*- ha quedado así institucionalizada (Alonso 2007).

Esta primera línea de intervención es, sin embargo, sólo un paso de la honda transformación del conjunto de *convenciones, presupuestos ideológicos y dispositivos institucionales* que fundan el mercado de trabajo, no como un abstracto mecanismo tendente al equilibrio, sino como un conjunto de *situaciones sociohistóricas* adscritas a contextos políticos concretos (Santos y Poveda 2002). El siguiente eslabón ha sido el cambio en los fundamentos de las políticas económicas y especialmente de las políticas laborales- dentro de una transformación general del Estado del bienestar, con el ya referido paso *Welfare State* -fundamentalmente desmercantilizador, subvencionador y sostenedor de la demanda social- a un *Workfare State*, cada vez más implicado en la formulación de políticas que buscan incrementar la seguridad del beneficio mercantil, la competitividad del tejido económico/productivo y la adaptación del capital humano y la formación tecnológica de los diferentes sujetos laborales. Lo que supone, a su vez, un reordenamiento político de las relaciones laborales tratando de disminuir (o erradicar) el número de colectivos dependientes de subsidios, pensiones, programas sociales o cualquier forma de existencia dependiente de los presupuestos públicos.

Bajo el epígrafe de la sustitución de políticas laborales pasivas por *activas*, hemos conocido un fuerte cambio de orientación ideológica en la intervención estatal en los mercados de trabajo, descolectivizando, fragmentando y desocializando la relación salarial, con objeto de crear las condiciones mercantilmente más eficientes en la mercancía trabajo, tomada como recurso individual y como responsabilidad única del interesado. A la flexibilidad se le vienen así a añadir la *empleabilidad, la adaptabilidad* y la *empresarialidad* como ejes centrales en la construcción política del mercado de trabajo basado en la *activación* de los recursos laborales (Serrano Pascual y Magnusson 2007). El planteamiento, por tanto, ha sido aumentar hasta el máximo la disponibilidad de la mercancía trabajo a los requerimientos en tiempo, espacio y niveles salariales de la oferta empresarial. Se descomponen así las cualificaciones tradicionales -colectivas e históricas- en *competencias* de rápida adquisición (y obsolescencia) y alta polivalencia, garantizando, en todo caso, la no ingerencia de las condiciones sociales y salariales del trabajo en las exigencias de máxima movilidad y convertibilidad de un proceso productivo acelerado e inestable. Igualmente se apela al espíritu empresarial no sólo para impulsar experiencias de creación de nuevas -pequeñas o virtuales- empresas o de autoempleo y trabajo autónomo, sino también para incorporar el marcador

simbólico de que el individuo es, cuando menos, empresario de sí mismo, calculador y arriesgado y no simple sujeto pasivo de la contratación, adverso al riesgo (Supiot 2011). En último término todas estas políticas activas han cristalizado realmente como acción real en el ámbito de la producción del capital humano y la adquisición -subvencionada- de competencias, dando lugar a una amplia promoción de cursos y enseñanzas destinadas a adecuar la mano de obra a las exigencias del mercado de trabajo actual, mediante acciones de formación, renovación y actualización de conocimientos y saberes siempre en la línea de conseguir una mejor adaptación del capital humano al mercado de trabajo.

De esta forma, los resultados de "las nuevas políticas de empleo" -de supuesto corte liberalizador- y sus posibilidades para generar empleo de una cierta calidad han sido bien pobres si lo comparamos con la desorganización social que han provocado. Y si el desempleo estructural se mantiene y en cualquier coyuntura vuelve a mostrar la peor de sus caras, este desempleo se ha activado -cristalizando una especie de empleo sin trabajo, de ocupación sin centro ni sentido- en la preocupante tendencia a producirse al calor de la desregulación, un infraempleo de naturaleza transitoria y de mala calidad. La enorme cantidad de trabajos efímeros, rotatorios, de rápida sustitución, con salarios ridículos y desprotegidos socialmente pueden aliviar propagandísticamente las estadísticas "de creación de empleo", pero nos hacen concebir pocas esperanzas sobre la posibilidad de todas estas políticas para estabilizar de manera automática y natural el mercado de trabajo, y mucho menos nos hacen concebir esperanza alguna hacia el futuro para construir mecanismos sociales suficientes para integrar en ese mágico mercado de trabajo a los parados de larga duración, a las mujeres menos promocionadas, a los grupos con menor capital relacional y, en general, a todas las franjas débiles y estigmatizadas de la sociedad postmoderna (Prieto 2007).

Estas medidas de turbulencia programada parece que pueden generar rentabilidad a corto plazo, y que pueden, a su vez, dinamizar algunas situaciones de control parcial por parte de algún oligopolio o de alguna coalición colusiva, que tienda a rigidificar el mercado de trabajo. Pero en ningún caso parece que aporten soluciones generalizadas y con futuro claro como para servir de modelo institucional (político) de funcionamiento perfecto del mercado de trabajo, debido a la amenazadora presencia de la precarización, los costes sociales de la inestabilidad y los posibles costes sociales proyectados hacia el futuro. Además al crear la ficción del mercado de trabajo como un mercado perfecto "*de virtud natural*", se obvian las conductas oportunistas y de abuso de normativa, así como por insuficiencia legislativa y de control político se amparan los vicios institucionales derivados de los comportamientos aprovechados (de *free-rider*) y las actuaciones con riesgo moral y selección perversa de los agentes, aquí son las virtudes privadas las que se convierten en vicios públicos (Palacio y Álvarez 2004).

El resultado ha sido así provocar todo tipo de efectos "*ganga*" y de "*sustitución*" rompiendo la estabilidad y seguridad jurídica del mercado de trabajo al introducir las modalidades más inestables de contrato o incluso de "no contrato" de trabajo (becarios, meritorios, voluntarios, etc.) donde antes había trabajos estables (Alonso 1999 y 2007). Sin olvidar tampoco lo que se ha dado en llamar los efectos "diluvio" o intergeneracional: la pérdida de trabajos de calidad de hoy, puede ser un coste social que nunca podremos recuperar en el mañana, esto es, la alta rentabilidad de hoy puede suponer la pérdida de las bases sociales de bienestar en el futuro, de tal forma que incluso los

costes sociales se estén difiriendo hacia el futuro sin evaluar que su acumulación puede ser excesiva para próximas generaciones, peligro diferido que cada vez parece más próximo y cercano en el tiempo.

Por fin, en cuanto al discurso meritocrático sobre la necesidad de incrementar la formación y de poseer altos niveles de capital humano para encontrar un lugar en el mercado de trabajo se olvida del uso institucional real de las competencias formativas y educativas. Así el capital humano y la cualificación formal se han convertido en condición necesaria, pero no suficiente, para integrarse en muchos segmentos específicos y mercados laborales internos. Así generaciones jóvenes (y no tan jóvenes) atesoran gran cantidad de horas de estudio, compran a precios de oro enseñanzas de todo grado, demandan de forma patéticamente adaptativa gran cantidad de cualificaciones suplementarias y de conocimientos añadidos sobre sus titulaciones de base, pero estos conocimientos o competencias jamás se hacen efectivos de manera estable y segura para una parte bien importante de sus efectivos en un plazo medianamente razonable (Brunet y Belzunegui 2003). Tenemos la preocupante evidencia cotidiana de que por aumentar el capital humano no aumenta el volumen general de puestos del trabajo de calidad la sociedad, ni cualifica el empleo realmente existente, aunque facilita en gran medida la movilidad social parcial de ciertos sectores especialmente dinámicos y ayuda a competir y adelantar puestos dentro de las diferentes colas del mercado de trabajo, pero estas colas no se han compuesto sólo por el capital humano, sino que han intervenido todo tipo de capitales para formarlas, capital económico, simbólico, relacional, cultural, etc., es decir, el conjunto de poderes e instituciones que generan la estructura social. El tema de cualificación no se puede tratar, como un simple elemento que ayuda a equilibrar el tipo de oferta con el tipo de demanda de trabajo, adecuando automáticamente la formación curricular al tipo de empleo que genera la sociedad y con ello vaciar los excedentes de los mercados laborales. La cualificación en un espacio donde hay modelos de codificación de la racionalidad técnica y económica sobre los sujetos y por lo tanto está condicionada a los conflictos por el sentido que la actividad laboral tiene en la vida misma de los grupos sociales -pues toda formación realmente efectiva acaba estando ligada a un proceso de trabajo concreto y a un contexto también concreto-, la relación entre el contenido de cada trabajo, y su reconocimiento en una definición formal, es resultado de las luchas sociales en torno a su institucionalización, las definiciones formales se construyen socialmente y, por ello, no siempre coincide la cualificación real del trabajo con la definición que de ella se hace.

4. Desregulación del mercado de trabajo y nueva pobreza

La pobreza no es un simple estado de escasez, es una diferencia estigmatizante construida en el seno de una sociedad determinada como expresión de un déficit en la constitución de la ciudadanía. Así, desde los años noventa se han venido sucediendo acciones que tienden a fragmentar y resituar amplios colectivos sociales, dejando a un grupo muy importante de éstos -las que no tienen apenas beneficios electorales- en un espacio acotado y bien delimitado -casi segregado-, como es el caso de las acciones en torno a la lucha contra la exclusión social y la “nueva pobreza”. Síntesis del avance del mercado de los años ochenta y de sus propios costes (en forma de incremento e institucionalización de franjas sociales especialmente débiles y vulnerabilizadas),

La sociedad neoliberal, por tanto, ha fragmentado los sujetos sociales individualizando hasta el desmigajamiento la cohesión social básica y, con ello, las bases de la participación distributiva. En consecuencia, la formación de los vínculos sociales se ha fraccionado y diversificado hasta quedar fuertemente estructurada en torno a círculos, comunidades (virtuales o reales), grupos de interés, identidades particulares, tribus, estilos de vida o redes de relación, lo que parece muy difícil es encontrar ahora discursos unificadores para esta auténtica explosión de sentidos como lo fueron el progreso, la modernidad, el bienestar general o el trabajo mismo en la era de la modernidad social.

La constitución de este nuevo ciclo sociodisciplinario se ha realizado como un proceso de reactivación y generalización del mercado y la competencia como entres absolutos (que dictan normas y definen la racionalidad misma) y asociado a esta remercantilización general existe también un proceso paralelo de institucionalización del *riesgo* y la *inseguridad* como regulador cognitivo de lo social en todos sus niveles (del mercado de trabajo a las operaciones financieras, de la política internacional a la amenaza del terrorismo internacional, de las prácticas de ocio al consumo alimentario a las percepciones de pobreza, etc.). De esta manera una diseminación y desformalización de las fuentes de riesgo e inseguridad han alimentado un modelo de gestión privatizada e individualizada de las estrategias de defensa, y por ello nos enfrentamos a todo tipo de prácticas de ajuste personal a los ciclos de actividad mercantil, del mismo modo que nos encontramos ante el refugio en posiciones neoconservadoras frente a la percepción construida del aumento de las amenazas y los peligros de procedentes del exterior (terrorismo, delito internacional, inmigración incontrolada, etc.). Esta gestión biográfica -inestable por definición- de los horizontes de trabajo y de vida, acaba produciendo todo tipo de fragmentaciones ofensivas y defensivas, desde la básica entre los ciudadanos de pago y los que no pueden pagar su propio derecho a la ciudadanía, hasta las múltiples maneras de adaptación defensiva en forma de comunitarismos, localismos o reacciones xenofóbicas.

Por lo tanto, en el actual *ciclo de autocontrol* mercantil la ciudadanía se hay convertido más en un deber de normalidad económica que en un derecho al reconocimiento de la naturaleza pública de lo social. En este sentido conocemos una rearticulación completa del Estado protector -benefactor y productor- hasta acercarse más a un Estado director o *manager*, que tiene como principal misión activar el mercado *total* o, dicho de otro modo, ajustar a los individuos a las nuevas disciplinas competitivas de todos los mercados en juego. El Estado ya no toma el papel de racionalizador y sostenedor de las riendas del mercado, sino que aumentando sus contradicciones y desgarradoras entre las funciones de legitimación y acumulación que debe cumplir -así como entre sus dimensiones económicas, políticas y sociales-, se pliega ante las lógicas mercantiles, reproduciéndolas, difundiéndolas y ampliándolas. Si bien, muchas veces tiene también que internalizar los costes sociales de la actividad mercantil nacional e internacional implementando políticas sociales, cada vez más asistenciales, focalizadas y parciales. La ambivalencia de la modernidad estalla así con efectos ideológicos fuertemente fragmentadores e individualizadores, a la vez que produce colectivos sociales en dispersión creciente: son los precarios y los nuevos pobres.

Perdida ya la *moral de los productores*, el paradigma de la flexibilidad se extiende por todas las representaciones sociales del trabajo, de tal manera que para muchos sectores de la población el primer dibujo del vínculo laboral posible no es tanto ya el del trabajador flexible como el del *parado flexible o el pobre flexible*. Nos encontramos así con sujetos que vagan de unas prácticas a otras, condenados a una interinidad y a una rotación de empleos permanente, sin posibilidad de establecer ningún plan futuro, obligados a vivir en el día a día: son los hijos de la desregulación, con modos de vida preocupantemente desestructurados. En esta jerarquía de ocupaciones, los grupos frágiles (ciertos jóvenes, inmigrantes, mujeres sin recursos) son relegados del fragmento secundario del mercado laboral a la vulnerabilidad absoluta y a la nueva pobreza, engrosando un ejército de reserva siempre disponible o prescindible ante las fluctuaciones de la demanda, sometidos a la temporalidad, a pseudotrabajos a tiempo parcial no elegidos, a la desprotección social: en suma, a la precariedad radical, cualquier dimensión moral del trabajo deja de tener sentido y es sustituida por una simple sumisión fatalista a los ciclos de negocios.

La precariedad laboral, se convierten así inmediatamente en precariedad social y de ahí el paso a la nueva pobreza es inmediato en un entorno social cada vez más fragmentado, defensivo y reactivo. La biografía productiva fordista era un continuo que discurría entre una incorporación relativamente temprana al trabajo corriente y una jubilación relativamente también tardía de la vida activa, en una trayectoria levemente ascendente dentro de una misma empresa o con mínimos cambios entre categorías muy homogéneas. Hasta el propio concepto de parado en ese ciclo fordista -como ha estudiado el economista francés Robert Salais (2005, 2007, 2009) - se explicaba por oposición a la pobreza tradicional; y así la emergencia de la categoría, incluso estadística, de parado se construía como una categoría formal que recogía a los asalariados que, coyunturalmente, se encontraban privados de empleo. Categoría que, en ningún caso, se podían confundir con la indigencia de la que se encargarían las oficinas de ayuda social a excluidos. El trabajo (y hasta la falta del trabajo) se separaban, definitivamente, de la pobreza, que quedaba recogida en el circuito de la ayuda asistencial.

El panorama postfordista es muy diferente: Conocemos así el esplendor del trabajo inestable, difuso y sin derechos, con cambios permanentes de ocupación y utilizaciones ambiguas o directamente atípicas de las disposiciones normativas y contractuales (becarios, autónomos, parados subsidiados, jubilados, etc.), todo ello circunscribiendo un mercado “balcanizado”, institucionalmente desorganizado y generador de riesgos sociales permanentes (desempleo, exclusión social, “desafiliación” o nueva pobreza como pérdida de las relaciones estables con la sociedad) y en el que el individuo capaz debe saber internalizar y gestionar, por sí mismo, en una aceleración de su disponibilidad y adaptabilidad a las exigencias del nuevo y cambiante mundo del trabajo .

La más interesante sistematización de esta situación es la de Robert Castel (2003, 2011) que parte de la hipótesis de un *doble eje* de integración por el trabajo -empleo estable, empleo precario, expulsión del empleo- y la densidad de la inscripción relacional en redes familiares y de sociabilidad -inserción relacional fuerte, fragilidad relacional, aislamiento social-; estas conexiones cualifican zonas diferentes de densidad conjunta de las relaciones sociales, *zonas de integración*, *zonas de vulnerabilidad* y *zonas de desafiliación*. Evidentemente no hay correlación mecánica entre los dos

ejes -eje laboral, eje relacional- y la pérdida de posiciones en uno no implica que no se pueda mantener la estabilidad social para ciertos individuos si en el otro eje se da una situación sólida y solvente.

Por tanto para Castel el tema de la nueva pobreza es global e institucional, la flexibilización y precarización del trabajo está separando cada vez más y privatizando estos dos ejes haciendo aumentar las distancias entre las zonas de integración y las zonas de vulnerabilidad -riesgo de pérdida de ingresos laborales, y de obtención de reconocimiento social por la ocupación de temporalización recurrente, de rotación y volatilidad en el empleo, etc.- y *desafiliación* -desintegración severa, pérdida total de autonomía, exclusión, mendicidad, etc.-; de tal manera que para Castel el mecanismo de la flexibilidad laboral combinado con el de la desformalización, desjuridificación y desinstitucionalización de todas las relaciones sociales y especialmente las laborales, está formando las condiciones para una sociedad exclusógena, donde a la vez que aumenta cualitativamente el poder y la comodidad del grupo integrado, aumenta cuantitativamente el tamaño y las dificultades de las zonas vulnerabilizadas y desafiliadas. Por ello Castel (2011) concluye que la verdadera lucha contra la pobreza no consiste, o al menos no únicamente, en tratar de insertar a los excluidos, sino en luchar por una transformación y consolidación de las condiciones de trabajo y de vida, muchas veces mirar sólo a los márgenes en los temas de cohesión social impide ver que los procesos se generan en el centro mismo. En realidad como concluyen Serge Paugam y Nicolas Duvoux: la *nueva pobreza* no designa otra cosa que el fenómeno asociado a la dinámica truncada de intervenir sobre las capas de población especialmente vulnerables, capas que hoy están en crecimiento cuantitativo y cualitativo y que la sociedad salarial había integrado en el periodo precedente, o dicho de otra manera, “la nueva pobreza esta en gran parte ligada a la erosión de la protección social para franjas cada vez más numerosas de la población. Pero esta pobreza no es sólo de orden monetario, toca el corazón mismo de la integración social –a saber, la estabilidad en el empleo-, lo que se traduce a menudo en una pobreza relacional, problemas de salud, dificultades de acceso al alojamiento, etc.” (Paugam y Duvoux 2008 : 35)

Es por esto que las políticas sociales que han desarrollado los Estados de orientación neoliberal han generado el concepto de exclusión social como un proceso de segregación estructural del capital social, donde la ciudadanía como valor colectivo queda fragmentado, segmentado y clasificado hasta a aislar a amplios sectores de la población en categorías socioadministrativas incapaces de generar estrategias políticas por sí mismas. Tanto los clásicos trabajos de Norbert Elias (1997) sobre la exclusión social, realizados a finales de los años cincuenta del pasado siglo, como los más recientes dirigidos por Pierre Bourdieu (1999) o Loïc Wacquant (2010) nos remiten a la exclusión y la pobreza no como una carencia sino como una distancia social y un proceso de oposición entre *los establecidos* y los *"outsiders"*, así cuando la cohesión interna de los establecidos aumenta, cuando se cierran y alejan en distancia de los *"outsiders"* estos desvinculan más y pierden contacto con las redes de interdependencia. Si políticamente los mecanismo de generación de coherencia de los establecidos cierran la posibilidad de incrustarse en las redes de interdependencia social a los *outsiders*, las intervenciones públicas del tipo “gestión de la pobreza” o “nueva beneficencia”, sólo generan más exclusión y estigmatización.

La pobreza –lo sabemos desde hace más de un siglo gracias al gran clásico de la sociología

George Simmel(2011) - hoy menos que nunca es un estado fijo, estático, cuantitativo y absoluto, es un proceso dinámico, difuso, cualitativo y relacional (lo que se refuerza con este fenómeno que llamamos nueva pobreza); proceso que se relaciona directamente con la forma misma en que conformamos nuestro estatuto ciudadano, y por eso con la forma en que se construyen los mercados e intervienen los Estados, las políticas contra la pobreza que no plantean la raíz social general de la misma y sólo la gestionan como un problema molesto y marginal sólo producen estigmatización y separación social. La forma en que se produce la pobreza y se gestiona es la forma misma en que se produce y gestiona toda la ciudadanía. La sociedad ya no está protegida por el Estado, o al menos difícilmente confía en la protección que éste le ofrece; ahora se halla expuesta a la voracidad de fuerzas que el Estado no controla y que ya no espera ni pretende recuperar y encauzar. Es por esta razón por la que los gobiernos estatales, en su esfuerzo diario por capear las tormentas que amenazan con arruinar sus programas y sus políticas, van dando tumbos *ad hoc* de una campaña de gestión de crisis a otra y de un conjunto de medidas de emergencia a otro” Bauman (2007a:25)

Conclusión: la ciudadanía más allá del mercado

La ciudadanía es una *construcción social* que viene determinada por el conjunto de representaciones, convenciones, instituciones y justificaciones que la articulan y regulan dentro de la vida colectiva de las diferentes sociedades. Por tanto, gran parte de las formas y modos de vida dependen de como se construye socioculturalmente el lugar que los diferentes colectivos ocupan en la sociedad y de como las instituciones, tanto informales (costumbres, tradiciones, tópicos, valores, discursos, etc.) como formales (normas jurídicas, administrativas y organizativas de todo tipo, y a todos los niveles políticos), generan el espacio en el que se desenvuelve su integración en los procesos generales de producción y reproducción económica y social.

El lugar que los diferentes grupos laborales han tomado en la economía postfordista no ha sido, pues, casual o accidental, sino que ha sido producto de las lógicas de flexibilización de la relación salarial inscritas en el despliegue del nuevo modelo de organización del trabajo y auspiciadas por las políticas públicas de temporalización y desregulación social de la contractualización laboral. En este sentido, se encuentra una cierta contradicción entre los objetivos declarados de inserción de los grupos especialmente débiles y vulnerables en el mercado de trabajo, buscando aumentar y reinstaurar "la cohesión social" y el contenido estricto de las medidas de competitividad total que toman el mercado de trabajo como un orden *hobbesiano* de todos contra todos. Casi siempre la resolución –en el nivel formal- ha sido insertar una serie de políticas paliativas de mínimos en un proceso de transición de una regulación administrada a otra estructuralmente liberalizada de la gestión de la mano de obra (Lallement 1999).

El resultado es el deterioro del lugar laboral de los grupos sociales con menor defensa familiar y social que se hunden, así, en la desestabilización que experimentan las relaciones laborales hasta hacer estallar el núcleo mismo del sistema salarial fordista y enmarcar el funcionamiento económico en nuevas formas de desigualdad social; formas que bajo el protéico concepto de flexibilidad tienen en común la ruptura de la lógica estructural que supuso la relación salarial como forma regulada de gestión y uso de la mano de obra y de obtención de una serie de titularidades públicas (bienes y servicios suministrados por el Estado del bienestar) y privadas (un

conjunto de bienes de consumo normalizados) –o sea una representación material de la ciudadanía- a cambio de entrar en un sistema codificado de organización social de la producción.

En este sentido parece difícil conciliar flexibilidad y seguridad -en la línea de los últimos discursos postliberales de la flexibilidad- e incluir a los sujetos frágiles de una manera externa y escasamente integrada si antes no se avanza en un nuevo concepto de flexibilidad que integre en la misma configuración de la relación salarial un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la mano de obra más colectivo, negociado y universalista. Sólo un planteamiento de una nueva relación salarial -no entramos aquí en las propuestas más generales de desvinculación entre trabajo y salario- que sea capaz de configurar un nuevo paradigma institucional y cívico -que no sólo mercantil- para la estructuración de una nueva gestión regulada y socialmente racionalizada de la utilización del trabajo. Sólo mediante un modo de regulación y desarrollo socialmente protegido pueden armonizarse las relaciones entre la flexibilidad micro -tomada en un sentido técnico estricto- y el empleo global (cuantitativa y cualitativamente considerado) y tomado como un compromiso previo (Gorz 2003).

El empleo digno y la construcción de una nueva ciudadanía laboral exigen la transformación y la recomposición explícita de la relación salarial a partir de innovaciones sociales pactadas en la búsqueda de una coherencia políticamente definida entre el modelo de acumulación económico y el modelo de regulación social. Las medidas de corte individualista y meritocrático (o sus simétricas las paliativas y asistenciales) se agotan en su propia contradicción si no se inscriben en la configuración de una relación salarial sustentada en un compromiso social con el empleo y los derechos públicos vinculados al trabajo como titularidad básica y a la flexibilidad como una forma colectiva de gestión de la producción que impliquen un tratamiento menos determinista y más abierto de la tecnología.

En este panorama, la flexibilidad tecnológica se puede también manejar como un elemento potenciador de la inclusión de formas laborales no convencionales y no sólo como disciplinador de las relaciones laborales. Una producción de bienes y servicios mucho más diseminada en el espacio, tecnológicamente más ligera e interconectada en *estructuras de red*, permite recoger formas de trabajo impensables para las antiguas grandes burocracias industriales y administrativas. En estos momentos en los que las formas de organización del trabajo han roto las pautas tayloristas simples y la *tecnodiversidad* es un hecho cotidiano, resulta fundamental la inclusión de elementos normativos que desarrollen el apoyo de formas de vida no convencionales dentro del conjunto de *sistemas* y *redes* cada vez más *descentralizados* y *multilocalizados* en los que se ha convertido la sociedad postindustrial, frente al gigantismo fabril o gestor del modelo anterior.

El cada vez más flexible mundo tecnológico permite superar la concepción rígida y tecnocrática del *one best way*, típica del taylorismo, y realizar diseños organizativos *sociotécnicos* de los instrumentos y herramientas de los procesos productivos (Ibarra Colado 1999). La posibilidad de generar diseños flexibles, "ad hoc", modulares o incrustados en contextos y requerimientos personales es un rasgo de adaptabilidad de los procesos productivos actuales, que al rebajar el "determinismo tecnológico", sin por ello perder eficiencia económica, abre fronteras increíbles para la plena incorporación al trabajo de las personas. El fomento, por tanto, de medidas concretas y

jurídicamente visibles para aprovechar la nueva flexibilidad tecnológica, así como para aumentar la contratación de todo tipo de colectivos discriminados, es un resorte institucional que no hay que perder. Según esto, hay que romper con la convención que nos hace tomar al trabajo, cuando lo pensamos con respecto a la tecnología, como una variable simplemente dependiente, considerándolo como algo inducido por los elementos tecnológicos y económicos y, por lo tanto, variable secundaria en la que sólo se puede pensar como resultado del desarrollo de la técnica y nunca como punto de partida de la planificación de tal desarrollo.

Este planteamiento convencional, hace de la tecnología un proceso opaco, casi fetichizado, en el que nunca se puede entrar a debatir porque se la considera como una dinámica absoluta e irreversible, que en ningún caso se puede problematizar. Las escuelas de pensamiento sociotécnicas tratan de abrir un planteamiento explícito sobre los usos laborales (tanto cuantitativos como cualitativos) de la tecnología, y es más, sobre los diseños de esa tecnología. (Misa 2004) Uno de los elementos centrales en la polémica es volver a rediseñar la tecnología en función del propio trabajo, que el trabajo cuantitativo y cualitativo sea considerado como un parámetro principal de los equipos materiales, y las necesidades de trabajo sean introducidas como elementos fundamentales en el propio diseño tecnológico. La tecnología en sí misma representa intereses, pero puede representar más intereses, así como el acuerdo y equilibrio entre ellos. De ello se deriva, por tanto, un diálogo social expreso sobre la tecnología y sobre sus efectos inducidos en el empleo, así como una cierta desacralización de la tecnología, humanizándola y acercándola más a sus usos específicos cotidianos y concretos. Surgen así conceptos como tecnologías intermedias, blandas, autosostenibles, neocomunitarias, que tratan de armonizar el necesario e imparable desarrollo tecnológico con los efectos sobre los entornos sociales y medioambientales y, sobre todo, sobre el empleo cuantitativo y cualitativo necesario y socialmente útil.

De esta manera, en un entorno tan cambiante social y económicamente como el que estamos viviendo con la crisis financiera como contexto total, en el que se están transformando radicalmente tanto los sistemas productivos y tecnológicos, como las pautas de intervención del Estado y la escala de los espacios y territorios en los que se efectúa la actividad económica, resulta un tanto estrecho limitar el problema de la inserción laboral a un problema de políticas de liberalización y temporalización de la relación salarial y de eliminación de "obstáculos" (garantías) para la incorporación en el mundo laboral, sin contemplar que estamos en una transformación fundamental del modelo de constitución de la vida económica en el que el valor de la eficiencia organizativa, política y social aumenta incluso como *estrategia competitiva no hobbesiana*. Es fundamental recalcar el carácter cada vez más complejo y concreto de la *ciudadanía* laboral y de los derechos sociales de ella derivados, creando un consenso de carácter superior a partir del diálogo y la formación de valores comunes creados en el respeto y el reconocimiento mutuo.

La *economía social*, por ello, es un campo que debe ser apoyado expresamente para poder recoger iniciativas de empleo gestionadas por criterios no mercantiles. Esta franja tanto de detección de carencias como de promoción de empleo de alta productividad social y de prestación de nuevos servicios adaptados a necesidades, sensibilidades y derechos sociales cuyo reconocimiento está en alza (servicios de proximidad, atención a ancianos, evaluación y vigilancia ecológica, etc.), presenta enormes posibilidades de generar *redes* de empresas sociales en las que el asociacionismo de las

personas puede ofrecer competitivamente sus experiencias, capacidad de adaptación al entorno y acercamiento concreto a los problemas a resolver (Laville 1999).

Todas aquellas medidas que ejercidas en el *tercer sector*, o en sectores más tradicionales de la actividad socioeconómica, que signifiquen la reducción de la dependencia y pasividad de los colectivos debilitados tienen efectos importantes en el *empowerment* o adquisición de capacidad, responsabilidad y solvencia social de estos grupos socioeconómicos más castigados -entre los que los cuales los colectivos en el "paro activo y recurrente" son un ejemplo resplandeciente -, ayudando a formar identidades activas, asociativas y emprendedoras. Cuando se están conformando en toda Europa figuras más complejas y flexibles de empleo que van engarzándose desde el trabajo mercantil a la actividad voluntaria, es necesario incluir a los segmentos de marginados del mercado de trabajo convencional, con su propia especificidad, entre los protagonistas de un "nuevo empleo" y una nueva ciudadanía que rompa la línea, demasiado tajante ya, entre los activos ocupados a tiempo completo y los inactivos en el sentido casi estricto de la palabra.

En suma, la nueva sociedad del trabajo se asienta sobre un conjunto de agentes y compromisos cada vez más complejos y que exigen una mayor flexibilidad como forma de gestión, pero esa flexibilidad no sólo debe atender a conductas burdamente *economizadoras*, sino que también tiene que obtener una mayor *eficiencia social*-relacionada a su capacidad para equilibrar conceptos como el nivel de empleo, la distribución de la renta, la conflictividad social, el contenido y la riqueza de las tareas, etc.-; y *política* -legitimidad de los acuerdos, democracia de las decisiones, instituciones morales, etc.-, sabiendo que esta eficiencia social y política, como ha mostrado analíticamente, Amartya Sen (1985, 2006) , no sólo es externa a la vida económica sino que es un bien organizativo más que genera riqueza y bienestar. No es pues en la competencia a la baja -malos empleos- y en la individualización desmedida -con la apertura a la utilización oportunista del trabajo- donde parece que se encuentre el futuro de una economía realmente moderna y el lugar de un empleo digno. Parece, más bien, que sólo un conjunto de incentivos institucionales diseñados poniendo en primer lugar y como objetivo principal -y no en el habitual y nominal objetivo secundario- un programa coherente de acciones sociales, puede controlar la tendencia inherente de los mercados a devorar sus bases sociales y morales.

Referencias bibliográficas

- Alonso, Luis Enrique (1999), *Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial*, Madrid, Trotta.
- Alonso, Luis. Enrique. (2005), *La era del consumo*, Madrid, Siglo XXI
- Alonso, Luis Enrique (2007), *La crisis de la ciudadanía laboral*, Barcelona, Anrhropos.
- Alonso, Luis Enrique y Martínez Lucio, Miguel (eds.) (2006) *Employment Relations in a Changing Society*, Londres, Palgrave/Macmillan, 2006.
- Aznar, Guy (1998), *Emploi: la grande mutation*, París, Hachette/Pluriel.
- Bauman, Zygmunt (2007a), *Liquid Times. Living in the Age of Uncertainty*, Cambridge, Polity .
- Bauman, Zygmunt (2007b), *Vida de consumo*, Madrid y México, Fondo de cultura Económica.
- Beck, U. (2012), "La política económica de la inseguridad" en *El País*, 27 de mayo.
- Boltanski, Luc, Chiapello, Éve (1999), *Le nouvel esprit du capitalisme*, París, Gallimard.

- Boltanski, Luc, Thévenot, Laurent (1991) *De la justification. Les économies de la grandeur*, Paris, Gallimard.
- Bourdieu, Pierre (dir.) (1999), *La miseria del mundo*, Madrid, Akal.
- Boyer Robert y Freyssenet, Michel (2000), *Les modèles productifs*, Paris, La Découverte.
- Boyer, Robert (2002), *La croissance, début de siècle. De l'octet au génie*, Paris, Albin Michel.
- Brunet, Ignaci y Belzunegui, Angel, (2003), *Flexibilidad y formación*, Barcelona, Icaria.
- Caillé, Alain (2002), *Critique de la raison utilitaire*, Paris, La Découverte, 2ª ed.
- Gaudemar, Jean Paul (1982), *L'ordre et la production. Naissance et formes de la discipline d'usine*, Paris, Dunod/Bordas.
- Castel, Robert (1995), *Les métamorphoses de la question sociale*, Paris, Fayard.
- Castel, Robert (2003), *L'insecurité sociale*, Paris, Seuil.
- Castel, Robert (2011), *El ascenso de las incertidumbres: Trabajo, protecciones estatuto del individuo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Castel, Robert, y Haroche, Claudine (2005), *Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi*, Paris, Pluriel/Hachette, 2ª ed.
- Cingolani, Patrick (2005), *La précarité*, Paris, PUF.
- Cohen, Daniel (2000), *Nos temps modernes*, Paris, Flammarion.
- Crozier, Michel, Huntigton, Samuel P. Y Watanuki, Joji (1975), *The Crisis of Democracy*, Nueva York, New York University Press.
- Du Gay, Paul (1996), *Consumption and Identity at Work*, Londres, Sage.
- Donzelot, Jacques (1994), *L'invention du social*, Paris, Seuil/Points.
- Elias Norbert y Scotson, John L (1997) *Logiques de l'exclusion*, Paris, Fayard, 1997
- Faulks, Keith, (2000), *Citizenship*, Londres, Rutledge.
- Foucault, Michel (1979), *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, Madrid, Siglo XXI.
- Galbraith, John K. (1992), *La cultura de la satisfacción*, Barcelona, Crítica.
- Gallino, Luciano (2002), *Il costo umano della flessibilità*, Roma y Bari, Laterza.
- Gorz, André (2003), *L'immatériel Connaissance, valeur et capital*, Paris, Galilée
- Harvey, David (1989), *The Condition of Postmodernity*, Oxford, Blackwell.
- Harvey, David, (2007), *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Akal.
- Ibarra Colado, Eduardo (1999), "Los saberes sobre la organización: etapas, enfoques y dilemas" en Castillo Mendoza, C. (ed.), *Economía, organización y trabajo. Un enfoque sociológico*, Madrid, Pirámide.
- Jessop, Bob (1994), "Post-Fordism and the State" en Amin, A (ed), *Post-Fordism: A Reader*, Oxford, Blackwell.
- Lallement, Michel (1999), *Les gouvernances de l'emploi*, Paris, Desclée du Brouwer.
- Lallement, Michel (2007), *Le travail. Une sociologie contemporaine*, Paris, Gallimard/Folio.
- Lash, Scott y Urry John (1987), *The End of Organized Capitalism*, Cambridge, Polity.
- Lash, Scott y Urry John (1994), *Economies of Signs and Space*, Londres, Sage.
- Laville, Jean-Louis (1999), *Une troisième voie pour le travail*, Paris, Desclée de Brouwer.
- Marshall, T.H.(2002), *Ciudadanía y clase social* Madrid, Alianza.
- Maruani, Margaret (2002), *Les Mécomptes du chômage*, Paris, Bayard.
- Michels, Robert (1979), *Los partidos políticos*, Buenos Aires, Amorrortu.
- Misa, Thomas J. (2004), *Leonardo to the Internet: Technology and Culture from the Renaissance to the Present*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.

- Offe, Claus (1985), *Disorganized Capitalism*, Cambridge, Polity Press.
- Orlean, André (ed.) (1994), *Analyse économique des conventions*, Paris, PUF.
- Palacio, Juan Ignacio y Álvarez, Carlos (2004), *El mercado de trabajo, análisis y políticas*, Madrid, Akal.
- Paugam, Serge (2005), *Les formes élémentaire de la pauvreté*, Paris, PUF.
- Paugam, Serge y Duvoux, Nicolas (2008), *La régulation des pauvres*, Paris PUF.
- Prieto, Carlos (2007), *Trabajo, género y tiempo social*, Barcelona, Hacer.
- Rose, Nicholas (1996), *Inventing Our Selves : Psychology, Power and Personhood*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Salais Robert et al. (2005), *L'Invention du Chomage ; Histoire et Transformation d'une catégorie en France Des années 1890 aux années 1980*, Paris, PUF, 3º ed.
- Salais, Robert (2007), *Aux sources du chômage. Une comparaison interdisciplinaire entre la France et la Grande-Bretagne*, Paris, Belin, 2º ed.
- Salais, Robert (2009), *Europe and the Politics of Capabilities*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Salais Robert y Thévenot, Laurent (1986), *Le travail : marchés, règles, conventions*, Paris Económica/INSEE.
- Santos, Antonio y Poveda, Maria, *Trabajo, empleo y cambio social*, Valencia, Tirant lo Blanc.
- Schumpeter, Joseph A. (1984), *Capitalismo, socialismo y democracia*, Barcelona, Folio.
- Schnapper, Dominique (2007), *Qu'est ce que l'intégration ?*, Paris, Gallimard/Folio.
- Sen, Amartya (1985), *Commodities and capabilities*, Ámsterdam, North- Hollan.
- Sen, Amartya (2006), *Identity and violence*, Nueva York, Norton.
- Sennett, Richard (2000), *La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo*, Barcelona, Anagrama.
- Sennett, Richard (2006), *La cultura del nuevo capitalismo*, Barcelona, Anagrama.
- Serrano Pascual, Araceli y Magnusson, Lars (eds) (2007), *Reshaping Welfare Status and Activation Regimes in Europe*, Bruselas, Peter Lang.
- Simmel, Georg (2011), *El pobre*, Madrid. Sequitur.
- Stiglitz, Joseph (2012), *El precio de la desigualdad*, Madrid, Taurus
- Supiot, Alain (ed.) (1999), *Au-delà de l'emploi*, Paris, Flammarion
- Supiot, Alain (2007), *Critique du droit du travail*, Paris, PUF, 2ª ed.
- Supiot, Alain. (2011), *El espíritu de Filadelfia. La justicia social frente al mercado total*, Barcelona, Península.
- Touraine, Alain (2005), *Un nouveau paradigme*, Paris, Fayard.
- Trigilia, Carlo (2002), *Sociologie économique. État, marché et société dans le capitalisme moderne*, Paris, Armand Colin.
- Wacquant, Loïc (2010), *Castigar a los pobres*, Barcelona, Gedisa.

España: un caso de fallo de país

Andrés Ortega Klein

Periódico 'El País'

Columnista y Editorialista



FALLOS MÚLTIPLES

La crisis vivida por España tiene múltiples causas. Algunas de estas causas son extrañas, es decir, no propias. Pues no hay que olvidar que, aunque hubo otras chispas previas, la que provocó el incendio fue la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, que generó la llamada Gran Depresión, sobre todo en Occidente, y con un impacto aún mayor en España que sigue en recesión.

Pero esta crisis ha puesto de manifiesto algunos fallos en España. De hecho, esa acumulación de fallos lleva a plantear que lo que hubo fue un “fallo de país”, un fallo del sistema en su conjunto, y de algunos de sus componentes en particular, incluida la sociedad civil.

Hay siete tipos de fallos que, todos juntos, conforman el fallo de país.

1. Fallo de gobierno

La burbuja financiera se impulsó desde el Gobierno, especialmente desde 1998 y la Ley del Suelo impulsada durante el primer mandato de José M^a Aznar, y posteriormente, y seguida por Rodríguez Zapatero durante su primer mandato. Es decir, una década de burbuja.

Es verdad que esa burbuja estuvo también favorecida por una burbuja financiera a la que contribuyó el ingreso de España en el euro, con tipos de interés bajos que convenían a Alemania para financiar la unificación, pero no a una economía como la española.

Desde un punto de vista político, una vez en marcha, era muy difícil *pinchar* una burbuja que estaba creando riqueza y puestos de trabajo, sobre unas bases sumamente endebles (algo que no se ignoraba). La nueva Ley del Suelo de 2007, y la posterior supresión de la desgravación fiscal por adquisición de vivienda llegaron tarde y de forma insuficiente.

Pero además, esos años de bonanza se desaprovecharon para hacer reformas estructurales que hubieran sido más fáciles de pasar, pues tenían que romper bastantes intereses creados: reforma laboral, liberalización servicios, etc.

Con la distancia que me da haber estado dos veces, con 12 años de diferencia, en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, quiero, sin embargo, señalar que gobernar se ha vuelto mucho más complejo. Baste leer los diarios de Azaña para ver el tiempo de que disponía un gobernante en los años 30. Pero hay otros factores que han contribuido a esta dificultad, con tres direcciones de “pérdida de poder”

- Hacia arriba, hacia la UE, muy especialmente con la unión
- Hacia los lados, hacia los mercados, especialmente los financieros que han crecido exponencialmente, y hacia los medios de comunicación que también se han multiplicado.

- Hacia abajo: hacia las Comunidades Autónomas esencialmente. Casi cualquier cosa que se plantee tiene hoy en día una dimensión autonómica que hay que tener en cuenta.

2. Fallo de la política

Más allá del Gobierno, la clase política se ha convertido en los últimos años en el tercer problema del país, según las encuestas del CIS. Los ciudadanos no ven a los políticos como capaces de resolver sus problemas, sino como un problema más. Y esto suscita inevitablemente la cuestión de la deslegitimación del sistema democrático tal y como está concebido, y abre las puertas a la aparición de discursos populistas en la derecha y la izquierda. A ello se suma en estos momentos la falta de liderazgo para dirigir a la sociedad en esta crisis.

Además, se ha producido una fuerte frustración de expectativas tras la victoria del PP y la llegada de Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno que, junto al empeoramiento de la situación económica y social, ha contribuido a la desmoralización de la sociedad.

El movimiento del 15M, de los *indignados*, y los que le han seguido reflejan este malestar. Las encuestas señalan un alto grado de simpatía de la ciudadanía hacia las cuestiones planteadas por este movimiento de protesta. Más allá de su evolución y futuro, la irrupción del 15-M ha sido indicativa de que la política necesita reinventarse, adaptarse a una sociedad en la que los ciudadanos no sólo quieren escuchar a sus dirigentes sino comunicarse con ellos, y en el que las élites están continuamente en el punto de mira, participar en la deliberación política. Las redes sociales no sólo se revelan como potentes instrumentos para la movilización sino que están cambiando la forma de hacer política: ésta tiene que dejar de ser unidireccional para ser multidireccional.

A la vez, la crisis ha debilitado en un grado extremo el liderazgo político en general, tanto en el Gobierno como en la oposición, sin compensar este debilitamiento con un gran pacto nacional.

3. Fallo de las instituciones

También han fallado las instituciones y de ello se deriva el desprestigio en el que han caído de forma general en la opinión pública. Entre estas instituciones cabría destacar además del citado Gobierno y los partidos políticos, el Banco de España por fallos de supervisión los sindicatos, las Comunidades Autónomas (con un aumento de la opinión a favor de la recentralización), e incluso los medios de comunicación que habitualmente eran referencias. El descrédito de las instituciones es patente. Hoy son más valorados los médicos, la enseñanza pública las Pymes que el Gobierno, o no digamos, los partidos políticos. Solo se salvan la policía, las Fuerzas Armadas y el Rey.

4. Fallo del sistema financiero

Es en una parte importante responsable de la burbuja financiera, con una excesiva asunción de riesgos (sobre todo de las cajas) y concesiones de hipotecas incluso por encima del valor de la vivienda adquirida. Claro que a ello contribuyó la falta de supervisión o acción por parte del Banco de España

5. Fallo de las empresas

Las empresas, de la mano de un crédito fácil (y a veces de la codicia), incurrieron en un endeudamiento excesivo, y muchas de ellas, cuando llegó la recesión, se encontraron sin margen de maniobra. También las empresas han pecado de la búsqueda de márgenes de beneficios excesivos, en detrimento de los precios en un mercado no suficientemente abierto a la competencia. Según un estudio de 2009 del BBVA, el diferencial en el margen de beneficios de las empresas españolas con respecto a la media de la zona euro contribuía más que los salarios al diferencial de inflación de España con la zona euro. En otras palabras, los márgenes de beneficio eran más relevantes que los salarios a la hora de generar inflación y lastrar la competitividad española. Recientemente, el Banco de España también lo ha puesto de relieve, y pedido una reducción de precios, una *devaluación competitiva*, actuando no solo sobre los salarios sino también sobre los márgenes y costes de las empresas.

Hay, además, una excesiva connivencia en España entre lo público y lo privado, que viene de lejos. El sociólogo brasileño Roberto Unger lo llama “mercantilismo plutocrático”, y lo considera uno de los grandes males de España que impide su mayor desarrollo.

6. Fallo de la sociedad civil

La sociedad civil no está exenta de responsabilidad. Está formada por ciudadanos, no por súbditos. Una parte es el mundo empresarial al que nos hemos referido. En segundo lugar está la acción de los sindicatos. La adaptación de los salarios a nivel agregado al nuevo contexto, globalmente hablando –pues hubo excepciones–, sólo empezó realmente a producirse en 2010 con la firma del nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva en el que se pactaron crecimientos muy moderados, por debajo del IPC, de los salarios para ese año y los dos siguientes. Pero en 2008, primero, y en 2009, ya en plena crisis, aumentaron en términos reales en un 3% (posteriormente se han reducido como parte de la llamada *devaluación interna*).

También cabe plantear la responsabilidad por el exceso de consumismo que hizo presa de este país entre 1997 y 2007. No toda la sociedad, claro. Pues una parte lo pasó muy mal durante la bonanza, y sus ingresos no subieron e incluso bajaron ante la competencia derivada de la inmigración.

Asimismo, la economía negra importa y es fomentada desde la sociedad civil, y la tendencia a evadir impuestos a todos los niveles está muy arraigada en España. Pero no se puede pretender tener el Estado del Bienestar de Dinamarca con el sistema fiscal de Angola.

Por otra parte, dentro de las responsabilidades de la sociedad civil está la de los triunfos electorales de algunos notorios corruptos.

7. Fallo de Europa

España ya no se entiende sin la Unión Europea, que permea casi todos. Aquí simplemente se trata de apuntar que también *Europa* ha fallado. El diseño de la Unión Monetaria era incompleto y defectuoso, y se ha dejado sentir con la primera gran crisis, que se ha traducido en una crisis de deuda que ha agravado la recesión en algunos países como España.

También ha fallado la gobernanza global. Si en un primer momento las cumbres del G-20, sirvieron para coordinar una acción conjunta de estímulos fiscales (de ahí salió el PlanE), pero que no tuvo continuidad. Alemania frenó en seco, y obligó a todos en Europa a decantarse por políticas de austeridad. Ante la divergencia de intereses, el G-20 dejó de ser

En el terreno internacional, y como apunte, hay que señalar que esta crisis económica de Occidente, y sobre de Europa, ha coincidido con la aceleración del cambio geopolítico y geoeconómico que estaba en marcha con el ascenso de los emergentes. En buena parte, ha hecho emerger a los emergentes y en primer lugar a China.

La competencia es muy real. Ni España ni Europa pueden pensar que la salida de la crisis significa regresar al punto de partida. Pues mientras salen de la crisis, el mundo ha cambiado y deben adaptarse a él.



LOS EFECTOS DE LA CRISIS

Algunos de estos problemas se han agudizado con la crisis, como el de la caída en la apreciación de la clase política y el deterioro institucional. Desde el punto de vista de lo que ha mejorado se puede citar la **competitividad** y la productividad (con las reducciones de plantilla y de salarios), y el **sector exterior**, pues España es de los pocos países de la UE que no ha perdido, sino lo contrario, cuota de mercado. También (a un alto coste general y para otras actividades) se está procediendo al saneamiento del **sector bancario**, especial aunque no únicamente, el de las cajas.

Pero el desarrollo de la crisis ha añadido otros problemas. Por supuesto está el central del paro (y 1,7 hogares en los que nadie está empleado). Pero, entre ellos, hay que añadir los siguientes:

1. El empobrecimiento de la sociedad

La crisis actual ha producido un marcado descenso del PIB por habitante, medido en poder adquisitivo. Por primera vez desde 2001, en que llegó a la media de la UE-27, había caído a finales de 2011 a un 99% (el punto más alto fue 105% en 2007), según los últimos datos de Eurostat. Y nueve puntos menos en comparación con la media de la eurozona. Es decir, un retroceso de una década.

La renta media disponible neta de los hogares por persona, según el Barómetro Social de España del INE, cayó de 11.120 euros en 2009 a 10.066 en 2010, (en euros constantes, base 2000), es decir al nivel de 2005-2006 Esta caída es de las mayores de Europa.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población en situación de pobreza ha pasado de un 19,6% en 2007 a un 21,8% en 2010, e inevitablemente más en 2011 y 2012. Y el 40% de los usuarios de los servicios que presta Cáritas son ahora familias que recientemente se sentían de clase media y acomodada. Cáritas ha pasado de atender a 400.000 personas en 2007 a más de un millón en 2011. En un año se ha elevado dos puntos el porcentaje de hogares que viven bajo el umbral de la pobreza. Ahora, el 22% de la población se encuentra en esa situación.

2. El aumento de la desigualdad

España se ha convertido en el país con mayor desigualdad de la zona, ya sea medida en términos de coeficiente de Gini o de ratio entre el 20% que más tiene y el 20% que menos tiene. Y, como muestran los datos de Eurostat, el aumento se ha disparado con la crisis.

3. El desmoronamiento de las clases medias

La salud de las clases medias es esencial para la estabilidad de la democracia. Las clases medias representan la mitad de los ocupados en España, pero el paro les afecta ya de lleno

(aunque el INE ya no recoge ese dato), y puede hacerlo aún más por la persistencia de la crisis y de la aplicación de la reforma laboral en época de recesión. La sensación de retroceso se está acelerando. Según datos de Millward Brown, en diciembre de 2011 el 20,1% de los individuos de clase media pensaba que sus ingresos podrían bajar durante el año siguiente. En febrero de 2012 este porcentaje había subido al 33,1%. La sensación de riesgo y de descenso social se expande a gran velocidad

Las clases medias están también siendo “atacadas” en tanto que el empleo público es un espacio natural de este grupo. Los despidos de interinos y las bajadas de sueldo a funcionarios les están haciendo daño.

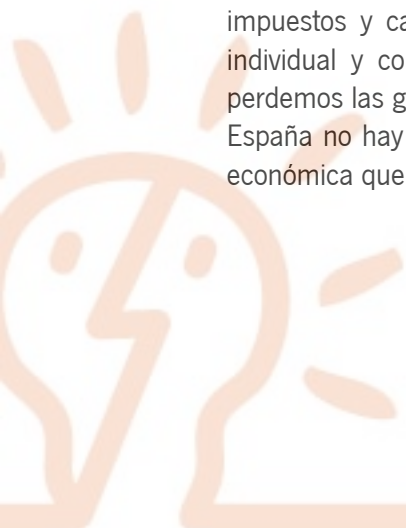
Pesa, además, la disminución de ingresos que alcanza a muchos hogares, con las crecientes estrecheces económicas de las familias agravadas por la expulsión mediante prejubilación o despido en el sector privado de los asalariados mayores de 45-50 años, hasta ahora paraguas de la crisis a la hora de asumir los costes de los desempleados y de los jóvenes (que también viven una tragedia de expectativas). La pérdida de empleo en este sector de edad de clase media y trabajadora con la persistencia de la crisis y las posibilidades para las empresas de la nueva ley laboral puede “desencadenar un drama social”, según el profesor de la Universidad Carlos III Juan Antonio Gómez Yáñez.

4. La desmoralización

Los españoles están desmoralizados, viven una crisis de autoestima. Las encuestas muestran que ven cada vez más negro no ya su presente, sino su futuro. Costó mucho, décadas, que recuperasen la confianza en su país. Esta confianza se ha quebrado de la mano de la crisis económica, de los problemas que conlleva para todos y para cada cual, y de las perspectivas de un rescate (no ya de la banca sino del Estado). Y por detrás, hay la crisis de la política a la que ya hemos hecho alusión.

En las últimas décadas, este país ha vivido un enorme progreso económico, político y social. El progreso se ha roto. No es tanto la sensación de que de nuevos ricos hemos pasado a nuevos pobres como de que nos hemos quedado sin objetivos y sin horizontes, o con un horizonte en el que los hijos vivirán peor que los padres.

A esta desmoralización contribuye también el efecto del estrés. La crisis está generando estrés en los individuos (por pérdida de empleo, incertidumbre, reducción de salarios, subidas de impuestos y carestía de la vida, etcétera). Y este estrés ha degenerado en desmoralización, individual y colectiva, cuando no depresión. También produce un estado de apatía, ya que perdemos las ganas de pelear. Al principio se intenta, pero la apatía vence”. Y, en efecto, en esta España no hay espíritu de lucha para hacer frente a las dificultades. Tras cuatro años de crisis económica que se ha extendido a la política, reina la desmoralización.



5. El debilitamiento de la sociedad civil

Con la crisis, la sociedad civil se ha debilitado. Es un buen ejemplo de cómo el debilitamiento del Estado suele acompañarse de un debilitamiento de la sociedad civil, especialmente en un país como España en el que ni el Estado ni la sociedad civil han sido nunca fuertes.

Me limitaré a dos casos. Por una parte, el descenso en el número, presupuesto y actividad de las ONG tras 30 años de desarrollo en una sociedad muy vacía de estas actividades. Estas viven de donaciones y subvenciones de particulares, empresas y las administraciones públicas, que se han recortado, con los consiguientes despidos y actividades paralizadas. Según expertos de ESADE ha desaparecido entre un 20% y un 30% de las ONG con la crisis.

En segundo lugar está la crisis de los medios de comunicación, sobre todo de los medios impresos. Se deriva en una parte de la revolución tecnológica, con la competencia de Internet, donde hay más medios que nunca pero también más lectores que nunca, sin que haya nacido un modelo empresarial alternativo, mientras diezma al clásico en papel, cuya difusión merma. Y de otra parte del hecho de que la crisis económica ha provocado una reducción de los ingresos publicitarios. No es un fenómeno propiamente español, sino de todos el mundo occidental. Pero en España supone la pérdida de fuerza de algunos medios que hasta ahora se habían convertido en referentes a la hora de conformar el espacio público de deliberación.

No obstante, la institución de la familia (aunque no concebida de una forma tradicional) se mantiene, e incluso se refuerza, con el regreso a la casa de los padres de hijos que carecen de ingresos suficientes para mantener un hogar propio, y de ancianos al recuperarse el cuidado en casa ante los costes de las residencias.

6. Las tensiones territoriales

La crisis está haciendo variar el apoyo de la opinión pública al Estado de las Autonomías. Los ciudadanos partidarios de la recentralización total o parcial del Estado (39%) ya son más numerosos que los de mantener la actual organización de las autonomías (29,5%), según el barómetro del CIS de septiembre de 2012, lo cual representa un vuelco en términos de opinión pública.

Mientras tanto, crecen las tendencias soberanistas e independentistas. Sin demasiado ruido en el País Vasco, pero con un formidable estrépito en Cataluña, donde el bloque de los que se sienten solo catalanes, sumado al de los que se consideran más catalanes que españoles, asciende al 59%, según el Centre d'Estudis d'Opinió. Los que se consideran tan catalanes como españoles son el 32%, mientras el 7% solo se considera español o más español que catalán.

Aunque el nuevo empuje del independentismo en Cataluña se debe más a otros factores, en los que no entramos aquí, también la crisis lo ha alimentado con la cuestión del pacto fiscal y la

búsqueda de una salida de la crisis propia para Cataluña. También es una manera de reducir el malestar social derivado de la crisis en Cataluña.

¿QUÉ HACER?

El ¿qué ha pasado? va estando más claro. Ahora hemos de entrar en el qué hacer. No me referiré aquí a lo que ya está en marcha (reforma financiera, reforma laboral, creación de una unión fiscal y una unión bancaria en Europa) de envergadura. Sino en políticas a desarrollar para lograr un nuevo modelo productivo y reformar la política.

1. Desbloquear la economía

España necesita un shock de liberalización. Demasiados sectores están cerrados a la competencia. Es difícil entrar en ellos. Y ello se debe a intereses creados y a que en este país se privatizaron grandes empresas antes de liberalizar los sectores. Pero liberalizar, servicios y profesiones liberales, implica romper intereses creados. Varios gobiernos lo han intentado. Ninguno lo ha logrado, frenado siempre por intereses sectoriales o profesionales. Liberalizar no significa debilitar al Estado, sino todo lo contrario, pues es el Estado el que debe garantizar las condiciones de competencia. En estos momentos se está produciendo lo contrario de lo necesario: no se liberaliza y se debilitan y pierden independencia los reguladores.

2. Federalizar el Estado y reformar la Constitución

El desarrollo del Estado de las Autonomías y de los poderes locales no ha sido acompañado de una reforma más amplia de la estructuras del Estado. No se trata de re-centralizar sino de racionalizar. Está pendiente la reforma del Senado para convertirlo en cámara territorial. Es necesario revisar la necesidad de la provincia, de las diputaciones, del número y poder de los ayuntamientos. Y adaptar también el Estado a la nueva realidad europea. Es necesario mantener un Estado fuerte, como Estado estratega. Se olvida que una función de los Estados (y de ahora reunión de Estados como es la UE) es crear mercado. La desregulación requiere más Estado, no menos, para controlar que se cumple.

De una forma más amplia, va ser necesario un replanteamiento del Estado, probablemente desde un óptica federal, aunque no haya aún suficiente acuerdo sobre lo que esto significa.

Todo ello –y otros aspectos del ordenamiento del Estado español- requieren una reforma bastante profunda de la Constitución, lo que necesita de un amplio consenso político. Y un problema es que los intereses electorales de unos y otros dificultan en grado extremo la elaboración de ese consenso.

3. Democratizar la política

El rechazo a la clase política, y a los partidos, más que a la política en sí, es marcado desde el inicio de la crisis como reflejan mes tras mes las encuestas del CIS. Es necesario reformar la política, de forma a aumentar la proximidad de los elegidos a los electores, y democratizar la vida interna de los partidos. Ello implicaría la reforma tanto de la Ley Electoral como de la Ley de Partidos para generalizar las primarias para todo cargo electo, de acuerdo con el sistema que impera en Alemania.

4. Actualizar el Estado de bienestar

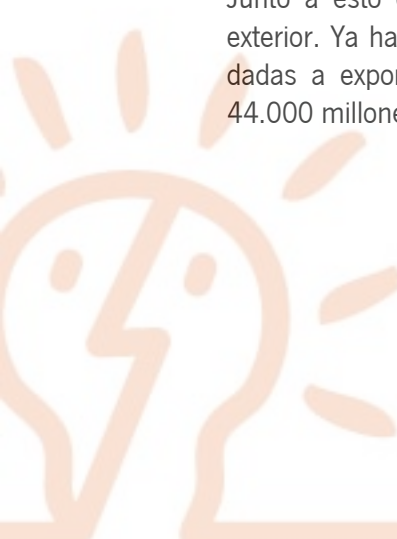
El Estado del bienestar, que es parte del concepto europeo de democracia, se basa sobre cinco patas: sanidad, educación, pensiones, prestaciones por desempleo, y dependencia (cuidados a mayores y enfermos). Los recortes lo han llevado a la baja de una forma poco racional. Sería urgente salvar la sanidad y la educación. Esta porque es inversión en el futuro, y quizás la que mejor puede ayudar a combatir la creciente desigualdad. La primera por es una fuente no solo de justicia social sino también de innovación tecnológica.

5. Una política industria

En el terreno industrial, hemos perdido un terreno que se puede recuperar. Las industrias siguen saliendo de España, y de Europa. Especialmente pensando que los emergentes pueden perder terreno a medida que aumentan salarios. Pero no es fácil señalar una vía, pues el marco de la UE impide cerrar mercados mientras se recuperan o se lanzan industrias. Tampoco el Estado dispone de fondos para impulsar políticas industriales. El último intento, la Estrategia y la Ley de Economía Sostenible, de 2010.

Desde la UE, la estrategia Europa 2020 apunta 17 sectores estratégicos a impulsar en lo que se considera una “nueva revolución industrial”.. Este documento y otros posteriores de la Comisión Europea se centran en la transición a una economía baja en carbono y eficiente en el uso de recursos. El objetivo es que en el conjunto de la UE la industria pase de representar en la actualidad un 16% del PIB a un 20% en 2020. La *economía verde* podría generar un millón de empleos en unos años. La *economía blanca* también, aunque ésta requiere más gasto público, del que no se dispone.

Junto a esto es necesarios que las empresas españolas se abran más a actividades en el exterior. Ya ha empezado, pero en una escala insuficiente. Sobre todo entre las Pymes, menos dadas a exportar. Un ejemplo del retraso son las exportaciones a China: Alemania exporta 44.000 millones de euros al año a China. Bélgica, 4.000 millones. España, solo 2.000 millones.



6. Cambio de mentalidad

Para salir de la actual crisis se requieren cambios de mentalidad. Del funcionario al emprendedor. De la seguridad a la sujeción de riesgos y la valoración del fracaso (algo que se da en EE UU). Y de la evasión fiscal a la conciencia sobre la necesidad de pagar los impuestos debidos. Y los directivos de empresas deben asumir comportamientos más morales y reducir la disparidad de sueldos, que se ha agrandado

7. Avances en Europa

Es evidente que la integración europea, en la UE y, sobre todo, en la Eurozona, tiene que avanzar hacia una unión no solo monetaria, sino también bancaria, fiscal y económica. Y todo ello, con un mayor control democrático.

“Europa” está perdiendo apoyos en España, a pesar de que es una dimensión estrechamente vinculada a nuestro ser democrático y modernizador. Se ve ahora como un emisor de condiciones y malas noticias (recortes). Un fracaso de Europa podría llevar a un fracaso de España, y a esa crisis de la política apuntada.

CONCLUSIÓN

No hay vuelta atrás. La salida no pasa por volver al punto de inicio de la crisis. España ha cambiado. Europa ha cambiado. El mundo ha cambiado. Hay que invertir en un nuevo futuro, en una nueva realidad.

Para ello se necesitaría un gran acuerdo nacional. Debe englobar todo lo anterior. A diferencia de los Pactos de la Moncloa de 1977, hoy un gran acuerdo nacional tendría que incorporar, además de a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, también las Comunidades Autónomas, pues son una realidad para la gobernanza que no existía entonces.



¿Se puede reinventar la política?

Joaquín Abellán García

Universidad Complutense de Madrid

Catedrático de Ciencia Política



¿Estamos ante el fin de la política, desbordada por decisiones económicas de carácter global y por necesidades de los ciudadanos que no puede cumplir por sí sola? ¿Se puede reinventar la política?

A continuación siguen algunas breves observaciones sobre el fenómeno de la pérdida del papel director del Estado, en el que han confluído factores de distinta índole, y sobre la necesidad de entender la política en unos términos más amplios que los tenidos en cuenta en los esquemas analíticos de la ciencia política dominante o en la práctica correspondiente al modelo de la democracia liberal.

1. Política y mentira

En las décadas siguientes al final de la segunda guerra mundial, Hanna Arendt (1906-1975) hacía la observación de que la política y la vida pública estaban marcadas por la amenaza nuclear proveniente del enfrentamiento entre las superpotencias mundiales. La política no se presentaba a sus ojos como una actividad de libertad entre los seres humanos, sino mas bien como algo impuesto por esas amenazas; amenazas que se reforzaban con razonamientos explícitos, con lo que parecía que el espacio público estaba perdido para la política.

Arendt denunciaba asimismo un nuevo fenómeno en las sociedades democráticas: una alianza entre la política y la mentira, que dejaba con ello de ser una práctica exclusiva de los regímenes totalitarios de la primera mitad del siglo XX. La mentira política no sólo se daba en los Estados comunistas del Este de Europa sino también en las democracias consolidadas de Occidente.

Este nuevo fenómeno en el que se fija Arendt es el conflicto entre la política y las “verdades de hecho”. La diferenciación que los filósofos habían establecido entre «verdades racionales» y «verdades de hecho» la retoma ahora Arendt para analizar el conflicto que encuentra entre la política y estas últimas, que ya no es el viejo conflicto entre esos dos tipos de verdad. Para ella está claro que si el poder político atentara contra las verdades de la razón, estaría yendo más allá de su propio terreno e invadiendo el ámbito de la razón. Pero el fenómeno sobre el que ella llama la atención es precisamente el comportamiento contemporáneo del poder político en relación con las verdades de hecho. Es ahí donde ella observa que se están produciendo los ataques del poder político. Su diagnóstico al respecto es que aquéllas corren el peligro de desaparecer del mundo y no sólo por un tiempo, sino para siempre

En su pequeño libro *Verdad y política*¹, Arendt menciona como ejemplos de mentiras políticas que niegan verdades fácticas la eliminación de Trotsky de la historia de la revolución soviética, la

¹ Hanna Arendt, *Wahrheit und Politik*. Berlin, Verlag Klaus Wagenbach 2006

afirmación de que Francia era uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial -base de la política de De Gaulle-, la afirmación de que la barbaridad del nacionalsocialismo sólo había sido aceptada por un porcentaje relativamente pequeño del pueblo alemán -base de la política de Adenauer-, o la falta de correspondencia entre lo que decía el presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson y la realidad de los hechos a propósito de la guerra de Vietnam².

El hecho llamativo es que no sólo ha ocurrido en las dictaduras sino también en los sistemas democráticos. En las dictaduras se falsean los hechos incómodos para los dictadores, y en las democracias modernas se intentan presentar el reconocimiento de hechos que resultan incómodos para los intereses de los gobernantes como la expresión de una mera opinión al respecto. Cuando las verdades de hecho se oponen a las ambiciones o a los intereses de los algunos grupos de interés, son perseguidas. Y entonces son convertidas en tabúes o transformadas en meras opiniones. Y aquí encuentra Arendt la gravedad de la cuestión: cuando los hechos resultan amenazados por su calificación de “opinión”, se entra en un nuevo conflicto entre verdad y opinión que parecía históricamente superado. Arendt encuentra en esta tendencia contemporánea a disolver los hechos en meras opiniones discutibles una similitud con lo que ocurre en el “mito de la caverna” de la *República* de Platón. Cuando el filósofo vuelve a la caverna, después de su paseo por el cielo de las ideas permanentes, para comunicarles su verdad a los hombres que estaban en el interior de la caverna, se encuentra que la verdad se pierde entre las opiniones y que él presenta como verdad se ha degradado a una opinión entre otras muchas: a la verdad se le opone el “a mí me parece” de la mera opinión³. Peor le parece a Arendt lo que ocurre en el mundo contemporáneo: ahora verdades de hecho se ocultan, se eliminan de la historia o se convierten en una mera opinión de quien las enuncia. Precisamente en una época como la nuestra, en la que existe la máxima tolerancia para todas las cuestiones filosóficas o religiosas –y sus enunciados de verdad- resulta que nunca se ha luchado con tanto celo y con tanta efectividad contra algunas verdades de hecho que se oponen a los prejuicios o ambiciones de determinados grupos de interés.⁴

Vista desde esta constatación, la política deja de ser una actividad de lucha por la libertad para convertirse en algo muy distinto.

² La publicación de los Papeles del Pentágono sobre la Guerra de Vietnam (N. Sheehan, *The Pentagon Papers as Published by The New York Times*, Nueva York, 1971) le llevó a Arendt a criticar la política de Estados Unidos como un ejemplo de las tendencias totalitarias de la sociedad moderna.

³ Arendt, *Wahrheit und Politik*, págs. 21-22.

⁴ Arendt, *ibidem*, pág. 20

2. Pérdida de soberanía de los Estados hacia fuera

El fenómeno de la globalización afecta asimismo al desplazamiento de la política de su posición directora de la sociedad. Del fenómeno de la globalización general, es sin duda la globalización de la economía la que más consecuencias visibles está produciendo. Y especialmente problemática para la política se ha mostrado la actividad de los mercados financieros. Por la importancia de su volumen y por la rapidez en la ejecución de sus negocios pueden producir crisis en las monedas y economías nacionales, sin que los gobiernos nacionales de las sociedades afectadas por ello tengan posibilidades para defenderse y dar una respuesta política. Uno de los principales problemas de la globalización actual está precisamente en la disociación existente entre los escenarios en los que se producen los problemas políticos y los escenarios con competencia para decidir políticamente. Muchos de los efectos sociales y económicos de la globalización se sustraen a la decisión política, porque las competencias de decisión política siguen siendo nacional-estatales. Sólo en algunos pocos ámbitos se ha logrado una cooperación transnacional, mientras que las causas, y los efectos, de los problemas traspasan las fronteras nacionales. En definitiva, la globalización económica pone en jaque la soberanía nacional-estatal, pues el surgimiento de nuevos actores y de redes transnacionales debilita la fundamentación nacional de la soberanía de los Estados. La base nacional-cultural que legitimaba al Estado democrático resulta difícil de compatibilizar con estas nuevas formas de soberanía transnacional. Una soberanía transnacional que no se asienta a su vez en una ciudadanía transnacional - difícil de crear por otra parte-, con lo que se vacía la legitimidad de los sistemas políticos nacionales frente a decisiones tomadas en ámbitos políticos supranacionales o desde otros ámbitos de carácter no político, como la economía, que ha pasado a ostentar la primacía. La consecuencia es, en resumen, una pérdida del papel director de la política.

3. Pérdida de soberanía interior

El desarrollo de la sociedad industrial y postindustrial actual ha conducido a una situación que ha podido ser tipificada recientemente como una “sociedad de riesgo”. Esta definición de la sociedad actual como una sociedad de riesgos quiere decir que la propia satisfacción de las necesidades que el sistema de producción capitalista va acompañada de la creación de amenazantes riesgos para el medio ambiente y para las propias personas. La teoría de la modernidad “reflexiva”, formulada por el sociólogo alemán Ulrich Beck, es una teoría sobre la modernización que es consciente de los peligros y efectos negativos generados por la propia dinámica de la sociedad.

En esta sociedad de riesgo, el Estado se muestra como incapaz de solucionar los problemas de los ciudadanos. En esta nueva situación, el Estado se encuentra sobreexigido para atender demandas y necesidades que lo sobrepasan, no pudiendo mantener ya su papel como director de la sociedad. De esta conceptualización de la sociedad como “sociedad de riesgo” se puede

derivar, no obstante, la necesidad de una alianza distinta entre el Estado y los ciudadanos para planear una actividad política que se tome en serio el control, la seguridad y la protección de los ciudadanos y del medio ambiente frente a los efectos destructivos del crecimiento económico⁵.

4. El sistema político como un subsistema social

Los científicos sociales de las últimas décadas del siglo XX han entendido analíticamente la política como un subsistema de la sociedad. De esta perspectiva metodológica para el análisis del sistema político –denominación que ha sustituido al “Estado” de la vieja teoría del Estado- la política no aparece ya como la actividad directora de la sociedad. También en este modelo analítico se opera, por tanto, con una pérdida de funciones de la política. Tanto el concepto de sistema político del politólogo canadiense David Easton (1917) como el del sociólogo norteamericano Talcott Parsons (1902-1979) o el sociólogo alemán Niklas Luhmann (1927-1998) coinciden en mostrar el carácter de la política como un subsistema social así como sus límites e incapacidades para satisfacer las demandas de los ciudadanos.

El conocido modelo del sistema político de David Easton es un sistema de flujo: situado como un sistema junto a otros sistemas sociales, a sistemas internacionales, a sistemas biológicos y sistemas ecológicos, el sistema político recibe, por un lado, demandas y apoyos provenientes de todos estos otros sistemas y subsistemas mencionados; y, por otro, procesa esa información produciendo resultados sobre la definición de sus objetivos sociales, la movilización de recursos, la elaboración y ejecución de decisiones políticas, o la “asignación de valores” para la sociedad con carácter vinculante⁶.

Talcott Parsons también define el sistema político (polity) como un subsistema funcional dentro del sistema social, ubicado dentro del sistema general de la acción humana. Para Parsons, igualmente, cabe construir un sistema político diferenciado desde el punto de vista analítico porque se puede efectivamente establecer una estructura determinada, resultante del establecimiento de procesos que se repiten ordenadamente en los que se produce una determinada relación entre determinados elementos, relación que es cumplida con la utilización de determinados medios. Parsons entiende así que cada sociedad puede ser analizada según un esquema de cuatro funciones: la adaptación del sistema al entorno mediante la apertura del campo de juego de hechos posibles; el establecimiento y realización de objetivos mediante la selección de un campo de juego entre los muchos posibles; la integración del sistema cerrando

⁵ Véase Ulrich Beck, *La sociedad de riesgo*. Barcelona, Paidós, 1998; *La invención de lo político*. México, FCE, 1999

⁶ Véase David Easton, “Categorías para el análisis sistémico de la política”, en: D. Easton, comp., *Enfoques sobre teoría política* (1966). Traducción de José Rovira. Buenos Aires, Amorrortu, 1969, págs.. 216-231; *Esquema para el análisis político* (1965). Trad. de Aníbal C. Leal. Buenos Aires, Amorrortu, 1969.

el campo de acción (integración de todos los componentes del sistema); y, finalmente, la subsunción de los hechos permitidos o seleccionados dentro de un marco general de referencia, es decir, bajo unos valores comunes de referencia, cuyo mantenimiento es necesario para cualquier sistema activo que quiera permanecer cohesionado⁷.

Dentro del sistema social, el sistema político es un subsistema que tiene que ver con todas aquellas acciones que conciernen a la función de la búsqueda colectiva de metas colectivas”. El sistema político estaría compuesto por todas las interacciones sociales tendentes a la selección y realización de decisiones vinculantes para la colectividad. Como subsistema social, el sistema político de una sociedad democrática sólo puede conservar sus límites si la interacción política discurre según las reglas que ordena el procedimiento político-democrático. Y el “medio” general con el que sistema político se comunica o se relaciona es el poder político. El sistema político democrático funciona de un modo en el que el poder político está liberado de la sumisión de otras épocas a dinastías, comunidades de carácter religioso o plutocrático, porque las elecciones libres, con voto secreto e igual, permiten que el poder político vaya a las manos de personas desvinculadas de esas situaciones anteriores y que compiten libremente por el mandato político. El poder político así configurado puede ser utilizado para la realización de los objetivos preferidos en el proceso democrático. No obstante, el sistema político requiere una legitimidad para poder conservarse, la cual sólo puede obtenerla en virtud de su ubicación en los valores de la sociedad y en la creación de órdenes obligatorias, requiriendo asimismo un apoyo afectivo por parte de los ciudadanos y los grupos sociales. Pero el sistema político requiere al mismo tiempo para su conservación un apoyo desde fuera de sí mismo, en el sentido de que tiene que interactuar con factores no estrictamente políticos, como los factores económicos. En la concepción del sistema político de Parsons es clave, por tanto, la red de intercambios entre el subsistema político y los otros subsistemas de la sociedad.

Tal como Parsons describe la evolución de la sociedad moderna, el aumento y la complejidad de las tareas políticas conduce a que tengan que trasladarse actividades políticas de intervención o de dirección a los otros subsistemas políticos de la sociedad y que el propio sistema político obtenga otros elementos, como dinero y valores de carácter vinculante, de otros subsistemas de la sociedad. Como en el planteamiento de Parsons se tiene en cuenta que el poder político no está establecido de una vez por todas porque depende de las elecciones democráticas, el sistema político tiene que estar permanentemente en una relación de intercambio, con la consecuencia de un “desbordamiento” continuo.

⁷ Talcott Parsons, *El sistema social*. Madrid, Alianza Editorial, 1999; .“El aspecto político de la estructura y el proceso sociales”, en: David Easton (compilador), *Enfoques sobre teoría política* (1966). Buenos Aires, Amorrortu, 1969, págs. 113-174.

De manera similar, el sociólogo alemán Niklas Luhmann entiende el sistema político como un sistema dentro la sociedad. El núcleo de su teoría de la sociedad es que, a diferencia de lo ocurrido en otras épocas, la sociedad moderna ha conocido un proceso de diferenciación interna en una serie de subsistemas diferenciados entre sí por la función que cada uno desempeña. La consecuencia más importante de esta idea de la sociedad moderna es que ésta está escindida en subsistemas funcionales sin disponer de un órgano central: “es una sociedad sin vértice ni centro”⁸.

El sistema político en concreto desempeña la función de producir para la sociedad decisiones vinculantes u obligatorias colectivamente⁹. El código con el que opera el subsistema político es la posesión o no posesión del poder político. Esto quiere decir que cada acontecimiento que se produzca en el entorno no político es percibido y transformado por el sistema político en una cuestión de posesión o no posesión del poder. Esto significa que una cuestión económica coyuntural, por ejemplo, o el aumento de la criminalidad en la sociedad o una cuestión medioambiental son percibidos y tratados por el sistema político desde la perspectiva de la influencia, positiva o negativa, de esas cuestiones sobre la posesión del poder político por parte de las autoridades.

Dentro del propio sistema político encuentra Luhmann, a su vez, distintos subsistemas, cuya interrelación afecta directamente al funcionamiento del sistema: el subsistema del público (la opinión pública), el subsistema de la propia actividad política (el personal dedicado a la política y su devenir profesional dentro de ella) y el subsistema de la Administración en un sentido amplio (la organización bajo las normas jurídicas). El sistema político así organizado genera la legitimación de su propio procedimiento. En el sistema democrático, por ejemplo, este procedimiento consiste básicamente en la celebración de las elecciones y en la participación de los ciudadanos en las mismas según las normas previamente establecidas. Pero Luhmann señala que no es el procedimiento el que legitima al sistema, sino que es el sistema el que se legitima a sí mismo a través del procedimiento. Las formas de gobierno, incluida la forma de gobierno democrática, son conceptualizadas por Luhmann como técnicas de control del sistema, que están dirigidas a evitar sobrecargas de complejidad, por ejemplo, un exceso de participación. La autoridad no es para Luhmann un vértice o un centro, sino sólo un recurso funcional para que el sistema pueda ser más eficaz.

⁸ Niklas Luhmann, *Teoría política del Estado de Bienestar*. Madrid, Alianza Editorial, 1993, pág. 43

⁹ Los otros subsistemas desempeñan otras funciones: el sistema jurídico la de regular los conflictos; el sistema científico la de acumular conocimiento; el sistema económico la de trabajar sobre medios escasos. Señala Luhmann que los productos de cada subsistema son para los demás acontecimientos del entorno, que cada subsistema percibe según su propio código diferenciado, con el que los transforma de un peligro potencial en un recurso del propio subsistema.

De esta manera, al ser entendido el sistema político como una función específica entre otras muchas de las funciones sociales, Luhmann entiende que el sistema político tiene que ser consciente de sus límites. El considera que el Estado democrático de la actualidad - orientado hacia las necesidades de la población y busca mejorar la satisfacción de las mismas-, se encuentra con un incremento enorme de las necesidades de los ciudadanos, que acaban esperando del “Estado” resultados que, con los medios de la política – decisiones vinculantes colectivamente- no se pueden alcanzar. Si a la política se le asigna el papel rector de la sociedad y se le imputa una responsabilidad general por cualquier cosa que acontezca en los ámbitos de la sociedad, “la política sería el destinatario último de todos los problemas sin resolver, sería una especie de cima jerárquica de la sociedad, sería la última instancia”¹⁰. Luhmann sugiere, por ello, un concepto “restrictivo” de la política frente a una política expansiva de califica de “dudosa efectividad”.

En relación directa con estos límites del sistema político en el esquema analítico de estos sociólogos cabe señalar además que uno de los problemas que presentan los sistemas democráticos es la diferencia temporal que existe entre la duración de los gobiernos elegidos y la requerida para la solución de determinados asuntos políticos. En la elección de los gobiernos se da un ritmo corto –de pocos años-, mientras que la acción política de un Estado necesita, sin embargo, tiempos largos para la coordinación de muchos factores –económicos, sociales, internacionales- y para la realización de objetivos políticos de largo alcance. Si no hay acuerdos coordinados, y duraderos, entre el Estado y los agentes sociales de distinta naturaleza –es decir gobierno, banco emisor, sindicatos, patronales-, esta carencia puede convertirse en un fallo estructural del sistema político.

5. Descrédito de los políticos

Otro factor que apunta en la misma dirección, hacia la pérdida del papel director de la política, es el desprestigio de los políticos y la desafección política de los ciudadanos a él asociada, que, como es sabido por todos, ha experimentado un considerable aumento en toda España en los últimos años.

Pero al mismo tiempo, frente a esta concepción reducida de la política y frente a la pérdida del papel director de la política, si miramos con sobriedad a la propia sociedad no se puede decir que la política esté en su final. Se puede constatar, más bien, que se han elevado propuestas y se han experimentado prácticas que refuerzan y completan el sistema político democrático, y que significan una ampliación del concepto de política, al incluir actividades de dimensión política más allá de las instituciones expresamente políticas. Estas propuestas destacan la dimensión política –“acción para el bien colectivo”- en ámbitos y espacios no expresamente

¹⁰ Niklas Luhmann, *Teoría política del Estado de Bienestar*. Madrid, Alianza Editorial, 1993, pág 156

políticos, es decir que están fuera de las instituciones políticas. No significa esto que se pueda ver política en todo, pero sí que en los distintos campos de la sociedad se puede ver y practicar la dimensión política. Un ejemplo puede ser la colaboración de padres, maestros y alumnos en la escuela. Junto a las cuestiones de la organización de la enseñanza, que está en las manos obviamente de la responsabilidad profesional de los maestros, cabe esa otra cooperación en cuestiones que tengan que ver con la organización del día a día escolar, con actividades que la escuela pudiera realizar en su medio social, etc... Esas acciones tienen una dimensión política que pueden y deben tratadas y decididas con procedimientos democráticos. O la *Mitbestimmung* en las grandes empresas alemanas, donde se pone de manifiesto cómo en agrupaciones no dirigidas a fines políticos pueden tomarse decisiones sobre cuestiones de dimensión política. O la aparición de nuevas identidades y nuevas formas de expresión, como la preocupación por el medio ambiente, la reclamación de derechos identitarios para nuevos grupos, el antimilitarismo y el pacifismo, o los nuevos movimientos sociales, que han desarrollado nuevas formas de acción colectiva y han afectado al modo de entender la política, apostando por nuevas definiciones de la misma.

En planteamientos más estrictamente teóricos se han hecho reflexiones sobre la necesidad de crear espacios públicos –más allá de las instituciones- donde los ciudadanos pueden deliberar y discutir entre ellos. La anteriormente mencionada Hanna Arendt entiende que el sentido de la acción política es la libertad y que, como el hombre entre en el espacio político como una persona en público, el hombre necesita manifestarse. Y para esto requiere formar su juicio, formarse una opinión razonable. En el caso de Arendt este requerimiento está directamente vinculado a su tesis sobre la gran proximidad existente entre el mentiroso que cambia- niega- la realidad y el político que quiere cambiar el mundo –proyecto que implica negar la realidad para poder transformarla-. Por ello considera ineludible que los individuos se formen una opinión razonable. ¿Cómo se puede llegar a esa formación? ¿Cómo se puede llegar a poder juzgar si las decisiones políticas son correctas o falsas, adecuadas o inadecuadas?

La respuesta de Arendt alude a que los ciudadanos se formen en y con un pensamiento *representativo*, es decir, con un pensamiento que persiga y analice los hechos desde todas las perspectivas subjetivas: yo me formo una opinión conociendo también las opiniones de los otros sobre la misma cuestión, es decir, cuando me hago presentes las opiniones o las perspectivas de los otros¹¹. En esto consiste para ella el pensamiento político realmente: éste nos exige un diálogo público con todos los afectados por el mismo asunto, o al menos un diálogo mental en que nos hagamos presentes las opiniones de los demás. Esta sería para Arendt la única posición política: estar dispuesto a introducirse en ese pensamiento *ampliado*, en traer a la discusión el punto de vista de los otros, en estar dispuesto a llevar el interés propio hacia un objetivo común a través de un proceso de aprendizaje colectivo. Este espacio de lo político, a pesar de su

¹¹ Arendt 2006, pp. 27-29

amplitud, está limitado por algo que los hombres no pueden cambiar, que está fuera del alcance del poder de los hombres y que sólo puede hacerse desaparecer provisionalmente mediante un autoengaño mentiroso: y ese algo es la verdad. Y la política sólo puede mantenerse íntegra y sólo puede cumplir su promesa de que los hombres transformen el mundo si respeta estos límites.

La pregunta siguiente es cómo establecer este proceso democrático. Arendt lo veía en peligro, y no tanto por la existencia en la sociedad contemporánea de un mayor pluralismo de los valores, sino por la atomización de los ciudadanos dentro de una política caracterizada por su pensamiento utilitarista y reducida en realidad a mera administración, y por tratarse especialmente por una política basada en la “mentira organizada que abarca a las masas”. Pero no avanzó mucho sobre cómo poder establecer estos espacios políticos.

En los últimos años han aumentado las reflexiones y las publicaciones sobre la democracia deliberativa, entendiéndola como la alternativa que puede superar las deficiencias del modelo democrático liberal, tanto por lo que respecta a sus prácticas participativas como por lo que respecta a su ideal de ciudadano. Jürgen Habermas, por ejemplo, propone que la democracia deliberativa continúe los logros de la democracia liberal y de la democracia republicana y evite sus carencias. Esto implica que en la democracia siga habiendo lugar para el pluralismo y para la lucha política de intereses. Pero al mismo tiempo que cuente con la solidaridad que falta en el modelo liberal y que desarrolle formas de comunicación que vayan mucho más allá de las campañas publicitarias del espacio público liberal, pues en la democracia deliberativa son fundamentales los procesos para que los ciudadanos puedan ponerse de acuerdo sobre los objetivos y los valores de la política¹². Es cierto que muchas reflexiones sobre la democracia deliberativa adolecen de falta de operatividad y permanecen en un nivel ideal, alejado de la situación real de los ciudadanos de carne y hueso. Pero hay, de todos modos, algunos intentos por concretar en la vida política espacios de deliberación y de decisión entre los ciudadanos más allá de la participación institucional, que no implica, por su parte, ninguna negación de la democracia representativa¹³.

En resumen, las transformaciones de nuestro mundo actual, y muy especialmente la pérdida de soberanía de los Estados en importantes áreas de su actividad considerada hasta ahora como centrales, obligan a reinventar o reajustar nuestras categorías políticas. Cabe recordar, no obstante, que la primacía de la política sobre cualquier otra actividad de la sociedad – especialmente la economía- caracterizó los sistemas políticos totalitarios de la primera mitad del

¹² Véase Jürgen Habermas, “Tres modelos normativos de democracia: sobre el concepto de política deliberativa”, en: *La inclusión del otro. Estudios de teoría política*. Barcelona, Paidós, 1999.

¹³ Resulta interesante el proyecto de James Fishkin sobre la “encuesta deliberativa”, porque intenta precisamente aplicar a la vida política estas reflexiones sobre la deliberación entre ciudadanos. Véase: James Fishkin, *Democracia y deliberación. Nuevas perspectivas para la reforma democrática*. Barcelona, Ariel, 1997.; *When the people speak: deliberative democracy and public consultation*. Oxford, 2009;

siglo XX. El primado de la política para organizar y dirigir la “lucha por la vida” de la nación, en Hitler¹⁴, o la concepción de la dictadura del proletariado, en Lenin, “que se apoya en el poder y no el derecho”¹⁵, o la glorificación del Estado en Mussolini, sobre la negación de la concepción económica de la historia y la negación de la concepción materialista de la felicidad humana¹⁶, condujo a la negación de la autonomía de la sociedad, del pluralismo y de la libertad. En la actualidad hay pensadores, especialmente en Francia, que intentan recuperar la tesis de la primacía de lo político acudiendo a una reinterpretación de Carl Schmitt.

La recuperación o reinención de la política más allá del reduccionismo en el que ha desembocado –tanto en el esquema analítico de los científicos sociales mencionados como en la práctica política actual- parece que debe contar de manera especial con la conciencia de sus límites dentro de una sociedad de carácter complejo como la actual, en la que interdependencia de los distintos subsistemas sociales es un hecho. Una consecuencia lógica de la aceptación de sus límites parece el necesario incremento de la cooperación de los ciudadanos, llevando éstos su participación, además de a las instituciones de la democracia representativa, a otros ámbitos y niveles de decisión de la sociedad civil. De esta manera se podrá completar el sistema democrático representativo, que está mostrando su necesidad de ser perfeccionado.

¹⁴ A. Hitler, “Discurso del 21 de marzo de 1933”, en: M. Domaurs, *Hitler. Reden und Proklamationen 1932-1945*. Wiesbaden, 1973, pág. 227

¹⁵ W.I. Lenin, “Zur Geschichte der Frage der Diktatur”, en: *Ausgewählte Werke in 12 Bänden*. Viena-Berlin, 1928, vol. 7, pág. 248

¹⁶ Entre otros, B. Mussolini, *Discorsi del 1926*. Milán, 1927, pág. 340